

Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Escuela de Trabajo Social

"El aborto voluntario. La lucha de mujeres, lesbianas, travestis y trans por el acceso a la ciudadanía"

Est. Carolina González
E- mail: carolinagonza40100@gmail.com

Tesina de Grado
Licenciatura en Trabajo Social

Directora: Lic. Silvina Boschetti
Rosario, agosto de 2019

Índice:

Presentación.....	4
--------------------------	----------

Parte I

Capítulo I

¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía?.....	10
Noción de ciudadanía y su reaparición en el debate público.....	10
El caso argentino.....	14
Condiciones para el debate.....	15
Críticas al concepto de ciudadanía.....	16
Ciudadanía, debate contemporáneo.....	18
Falsa universalidad.....	20

Capítulo II

Perspectivas feministas sobre el debate de la ciudadanía.....	23
Universalidad y particularidad.....	23
Público y privado.....	25
Igualdad y diferencia.....	27
Ambigüedades en el reclamo del derecho ciudadano de las mujeres.....	29

Parte II

Capítulo II

Lo personal es político.....	33
Herederas de una lucha.....	34
Características del movimiento de mujeres en argentina con el retorno de la democracia.....	37
Los noventa.....	41
Cambio de siglo, primeras décadas del dos mil.....	42
La conformación del pueblo feminista.....	45
De las políticas de población a los derechos de las mujeres.....	47

Capítulo III

Aborto voluntario, un derecho clave para la ciudadanía plena.....	54
---	----

Capítulo IV

¡Que sea ley! El camino del proyecto de IVE hasta ingresar al Congreso.....	57
---	----

Reflexiones finales.....	64
Bibliografía.....	70

Presentación

Este trabajo comienza a escribirse en un año donde la lucha por la legalización del aborto voluntario se encuentra en el tapete de las discusiones, tanto en el ámbito de los organismos estatales, como en los medios de comunicación y en la sociedad civil en su conjunto, y al mismo tiempo que, por primera vez, un proyecto de Interrupción Voluntaria del embarazo (IVE) adquiere tratamiento legislativo en Argentina.

Antes de continuar quiero hacer algunas aclaraciones en cuanto a la redacción de este trabajo. Si bien el tiempo verbal utilizado para la escritura académica es la tercera persona, al menos durante la presentación del tema y en las reflexiones finales, resulta inverosímil.

Cuando se redacta un texto o se relata una historia en tercera persona se exponen los hechos realizados por otrxs, es decir, se presenta lo ocurrido desde el punto de vista del/la observador/a, de quien no participó en la historia. Cuando utilizamos la tercera persona, el o la narradora no tiene relación con el/la emisor/a o receptor/a de un mensaje, ni con lxs protagonistas de la historia.

Y en esta presentación particularmente expresaré cuales fueron las razones por las que decidí escribir sobre este tema. Estas razones distan bastante de un lugar de observadora, especialmente en un año, 2018, que nos encontró a todxs lxs activistas feministas siendo actorxs de la historia, es por esto que en estas páginas utilizaré otro tiempo verbal más acorde con lo redactado.

Si bien es durante el 2018 que empieza a desarrollarse este trabajo, el interés por el tema surge hace un par de años. Puedo ubicar este interés con el comienzo de mi militancia en la colectiva feminista Mala Junta y el descubrimiento del equipo de acompañamiento en abortos seguros con misoprostol, que lleva a cabo la misma. A partir de allí, fui reconociendo que la lucha por la legalización del aborto voluntario lleva muchísimos años, y ha tomado diferentes rumbos con avances y retrocesos y con especial dificultad en los países Latinoamericanos y Argentina no es la excepción.

En nuestro país, la legislación actual respecto al aborto data del año 1921 y sólo despenaliza la práctica debido a dos causales: violación y salud. Esto acarrea importantes limitaciones y por lo tanto graves dificultades para acceder, a lo que sostendré en este trabajo como un derecho, el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Durante mi tránsito por la Licenciatura en Trabajo Social, fueron varios los momentos y situaciones que llevaron a plantearme el aborto como una cuestión de derechos humanos. El primer momento de sensibilización con la perspectiva de género, fue durante el cursado de la Cátedra Política Social II, en la cual comenzamos a ver, cómo desde las políticas sociales, se intentaba paliar con las desigualdades

de género, muchas veces reproduciendo los roles de género que conllevan a esa desigualdad. Este acercamiento me permitió pensar en nuestra capacidad reproductiva como parte de la diferencia sexual que, presentada con irrelevancia política, sigue reproduciendo mecanismos de sujeción y opresión de las mujeres. Esto despertó el interés sobre las problemáticas de género y la importancia del movimiento de mujeres y feministas al momento de ampliar derechos e incluir la perspectiva de las mujeres en las políticas públicas y políticas sociales.

Este interés despertado por la formación de grado se vio reflejado en el acercamiento al movimiento feminista y la militancia en estos espacios. En el transcurso de los años de formación, las cátedras de Trabajo Social IV, Prácticas Profesionales en un Centro de Salud y los Talleres de Aprendizaje Integrado, pusieron el foco en la capacidad reproductiva y nuestro rol naturalizado de mujeres-madres y como responsables del cuidado de niñxs y ancianxs que conlleva a un desigual uso del tiempo.

Por tal motivo, al acercarme a los espacios de militancia feminista me incorporaré al equipo de acompañamiento en abortos seguros con misoprostol. Puede considerarse que el hecho de abortar da en el centro del mandato hetero-patriarcal, la maternidad obligatoria, la sexualidad centrada en la reproducción, el lugar de la mujer en el cuidado, del cuidado de otrxs sobre ella misma, la obligación de la mujer de ser la que se responsabilice por la anticoncepción. Entonces, al momento de pensar en legalizar el aborto voluntario, no sólo resulta interesante observarlo desde un paradigma de la salud pública como reducción de daños, para evitar la muerte; sino también como una forma de romper con estos mandatos que están social y culturalmente sancionados y penados.

El tema del aborto puede ser abordado desde diferentes aristas, como se hizo evidente en las reuniones informativas de ambas cámaras legislativas al momento de la discusión. Una mirada posible podría ser abordarla desde la salud pública, o desde el campo jurídico o desde el acceso a la ciudadanía, entre otros. En este trabajo me interesará específicamente, el aborto como un derecho ciudadano de las mujeres y cuerpos gestantes.

En base a esto, será necesario repasar el concepto de ciudadanía de las mujeres y sobre todo, analizar de qué manera se pujó por la legalización del aborto voluntario a lo largo de la historia en Argentina, siendo de especial interés el rol del movimiento de mujeres desde el regreso de la democracia.

Para desarrollar este trabajo se utilizará una metodología cualitativa, empleando fuentes de información secundaria y primaria. Dentro de las primeras se encontrarán libros, tesis doctorales, ponencias, presentaciones, notas, revistas digitales. Y dentro de las fuentes primarias incluiré registros de exposiciones de jornadas y paneles.

Este trabajo tiene particular interés en incorporar perspectivas alternativas al momento de construir conocimiento. A lo largo de la carrera en las materias “Metodología de la Investigación Social I”, la cual se dicta en cuarto año de la carrera y “Metodología de la Investigación Social II” perteneciente al quinto y último año, se plantea la construcción del conocimiento científico válido en Ciencias Sociales. Durante los dos años de cursado de estas materias no hubo ninguna referencia ni se tuvo en cuenta los aportes que realizan los feminismos en relación a un punto de vista crítico que cuestiona la tradicional y androcéntrica forma de hacer ciencia.

Aún hoy, se encuentran cátedras que siguen un modelo de conocimiento, y construcción del mismo, que responde a un conocimiento androcéntrico. Preguntarnos por el androcentrismo implica, al menos, interrogarnos por las raíces más profundas del conocimiento científico, por la relación entre la hegemonía viril y las restantes múltiples manifestaciones del orden hegemónico en nuestra vida social, en definitiva, por la relación entre la práctica social y las elaboraciones teóricas ideológicas que la legitiman y perpetúan. (Sardá, 1987).

Si es evidente que toda sociedad humana está constituida por hombres y mujeres de distintas condiciones; si es, al menos, discutible que la aportación de las mujeres a la vida social humana sea inferior a la de los hombres, si no parece claro que la aportación de los hombres tenga que considerarse superior; entonces debemos preguntarnos por qué en el discurso lógico-científico con mayor claridad en el discurso de las ciencias humanas, la realidad y la aportación de las mujeres a la vida social humana aparece marginada, negativizada, silenciada: menospreciada. (Sardá, 1987)

Se coincide en este punto con los aportes de Sardá la cual escribe que el discurso académico actual no solo es androcéntrico, además encubre esa perspectiva particular, y la identifica con lo humano y de esta manera reproduce los parámetros mentales propios del saber vinculados al arquetipo viril, que gobierna profundamente el conocimiento académico, lógico- científico, considerado como el conocimiento por excelencia.

De este modo, fomenta que también las mujeres aspiremos a semejarnos a él y lo asumimos como yo consciente en el razonamiento académico. Al fin y al cabo, las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres, esos está claro. Lo que no está tan claro - y constituye un problema clave del debate feminista- es si queremos o no hacer lo mismo que los hombres, ¿lo mismo que qué hombres? (Sardá, 1987)

Por estos motivos me parece necesaria la incorporación en este trabajo de los aportes que hacen los feminismos al modo hegemónico androcéntrico de construir conocimiento científico. Avanzar hacia una nueva perspectiva no-androcéntrica implicaría valorar aquello que fue

negado, y darle importancia y significado a todo lo que ha quedado marginado desde el punto de vista hasta ahora hegemónico.

Cuando se habla de feminismo se hace referencia a una ideología como sistema de ideas-fuerzas que orienta nuestro hacer y pensar respecto a la política, pero que no por ser un sistema se encuentra cerrado, inanimado, suficientemente probado. Esta dimensión práxica del feminismo invita a pensar en la localización de los saberes recuperados como insumos del pensamiento político emancipatorio. En este sentido es que Donna Haraway, importante exponente de la epistemología feminista, propone la perspectiva de conocimiento situado que, dando cuenta de la naturaleza encarnada de la producción de saberes, asume explícitamente su parcialidad, en un acto ético y político que da un golpe fundamental a la pretensión objetivista que caracteriza al pensamiento androcéntrico, patriarcal y colonial. (Fabbri, 2013)

Retomando los aportes de Diana Maffía (2004) la pretensión de objetividad del modelo androcéntrico, propone una neutralidad valorativa, es decir, un/a sujetx de conocimiento de la ciencia que no pone en juego sus valores y sus emociones a la hora de producir conocimiento sino que los neutraliza. El/la sujetx es capaz de dominar su propia subjetividad, de borrarla, y simplemente dejar testimonio de lo que ve, para que otrx sujetx pueda tomar su lugar y probar si eso que ha sido descrito es verdad o no. Esta neutralización, es una especie de reemplazabilidad de este sujetx, por cualquier otro sujetx, produciendo el mismo resultado.

Como afirma Haraway (1995), la objetividad feminista significa, sencillamente, conocimientos situados. Pero adicionalmente, para que la perspectiva de que los conocimientos situados constituyan una forma de objetividad, resulta necesario atender a unas epistemologías encarnadas o incorporadas. Las tecnologías de la visión se efectúan desde cuerpos orgánicos y no orgánicos, cuerpos complejos, contradictorios, estructurantes y estructurados, y no desde arriba, desde ninguna parte, desde lo simple. De esta manera, el conocimiento situado es también conocimiento incorporado: la visión desde ninguna parte negó esta relación al separar el sujeto y el objeto de estudio pero desde la perspectiva del conocimiento situado se restituye esta conexión, se aprecia la empatía con lxs sujetxs que se estudian, así como el papel activo que estos tienen en el proceso de producción de conocimiento. De acuerdo con Haraway *“el conocimiento situado requiere que el objeto de conocimiento sea visto como un actor y un agente, no como una pantalla, un soporte o un recurso, y nunca finalmente como un esclavo del maestro que encierra en sí la dialéctica en su agencia única y su autoría del conocimiento “objetivo”* (Haraway, 1995, p. 331).

Otro aspecto que hay en este mito de la ciencia moderna, es el valor de la literalidad en el lenguaje. La literalidad significa que lo que el conocimiento científico tiene que producir es

una descripción del mundo, de manera tal, de crear un lenguaje específico para la ciencia, que asegura la referencia. El/la sujetx desaparece como constructor de una interpretación sobre ese mundo, es meramente un/a testigx que debe referir de manera directa, de tal modo que cualquier otrx pudiera saber, exactamente a qué nos referimos.

Contra este modelo, propongo siguiendo a Maffia (2004), una visión diferente y es la idea de que nuestra manera lingüística de acercarnos al mundo se parece más a la metáfora que a la literalidad. Es decir, nosotrxs avanzamos con lo que conocemos y tenemos instrumentos de comprensión sobre cosas que no conocemos, sobre las que aplicamos estas fórmulas, estas capacidades de interpretación que ya poseemos. Vemos el mundo ‘como si...’ lo que ya comprendemos de antemano. No podemos avanzar de manera neutral sobre lo que no conocemos e incorporarlo. Lo incorporamos a algo que previamente tenemos, y procedemos, entonces, a capturar estas cosas y a modificarlas con un movimiento más parecido al de la metáfora.

Coincido también con Donna Haraway, cuando la misma escribe que la objetividad feminista trata de la localización limitada y del conocimiento situado, no de la trascendencia y el desdoblamiento del sujeto y el objeto. Todos los ojos, incluidos los nuestros son sistemas perceptivos activos que construyen traducciones y maneras específicas de ver, es decir, formas específicas de vida.

Diana Maffía (2004), aporta en este sentido cuando escribe sobre el final de su trabajo “Contra las Dicotomías: Feminismo y Epistemología Crítica”, que todas las miradas son constitutivas del mundo, cada una desde su personal perspectiva es imprescindible. La exclusión de las miradas subalternizadas en la cultura no sólo es un problema político, es un empobrecimiento del resultado mismo de la empresa humana del conocimiento. Y ninguna pretensión de universalidad puede prescindir de la mitad de la humanidad. Una visión tal del conocimiento y de la ciencia, la transforma en una empresa mucho más inclusiva, invita a las mujeres a participar en ella y a cooperar en la comprensión de un universo que, sin nosotras, sería imposible.

Resulta importante incluir estos aportes que hacen los feminismos dentro de este trabajo ya que dan lugar a la existencia de otrxs sujetxs conocedores, otras maneras de conocer y crear conocimiento lógico- científico. Particularmente en la problemática abordada en este trabajo, afecta principalmente a poblaciones subalternas que no corresponden al arquetipo viril de construcción de conocimiento.

Para dar lugar a la existencia de otrxs sujetxs, una buena manera de comenzar a hacerlo es utilizar lenguaje no sexista. En este trabajo se empleará la x para reemplazar el masculino

genérico y empezar a incluir a otrxs sujetxs. Siguiendo a Amparo Moreno Sardá (1987) las repercusiones psico- lingüísticas del uso del masculino como generalizador son diversas: 1. Repercusiones directas: la utilización del masculino como generalizador oculta la participación y hasta la existencia de las mujeres y otras identidades. 2. Repercusiones inducidas: la utilización del masculino como generalizador induce a confundir lo que sólo afecta a los hombres con lo humano, y a creer que cuando se dice hombre atañe indistintamente a mujeres y hombres de distintas condiciones, como seres humanos que somos todas y todos.

Entonces incorporar un lenguaje no sexista en la escritura de los trabajos, es un primer paso que contribuiría a generar un ejercicio crítico a la hora de abordar las lecturas androcéntricas que se proponen para pensar lxs sujetxs de conocimiento y el modo de construir conocimiento científico válido; y de esta manera poder pensar en otrxs sujetxs y formas de construir conocimiento, que cuestionen al investigador, varón, blanco y occidental como el único observador y protagonista de la historia. Es una forma de romper con la lógica occidental en el proceso educativo, problematizando las estructuras dicotómicas de pensamiento, que históricamente han dominado al razonamiento moderno que se han construido en pilares ideológicos de dicha dominación.

El desarrollo de este trabajo se dividirá en dos partes a modo organizativo pero profundamente ligadas y en constante diálogo. La primera parte dará cuenta de concepto de ciudadanía, su surgimiento, construcción y reformulación constante, el interés renovado por este tema desde el regreso de la democracia en nuestro país y su análisis desde una óptica feminista en el reclamo de ciudadanía de las mujeres.

La segunda parte describe cómo el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans ejerció y ejerce un papel fundamental en la ampliación de la ciudadanía, poniendo especial atención a un reclamo históricamente relegado, el derecho al aborto voluntario, como bisagra para lograr una ciudadanía plena de las mujeres y cuerpos gestantes. Este apartado dará cuenta de la historia de este reclamo, las estrategias de esa lucha y su llegada al Congreso de la Nación.

Parte I

Capítulo I

¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía?

El presente trabajo se realiza desde el entrecruzamiento de estudios sobre la ciudadanía de las mujeres entendiendo al aborto voluntario como un derecho ciudadano y la importancia de los movimientos de mujeres en la ampliación de derechos desde el regreso de la democracia.

Uno de los conceptos centrales en el desarrollo de esta tesina será el concepto de ciudadanía de las mujeres. Entendiendo a la ciudadanía como una forma de identidad política que se identifica con los principios de la democracia pluralista, la afirmación de la libertad y la igualdad para todxs lxs sujetxs. Se trata de una identidad política común entre personas que, aún con diferentes concepciones del bien y compromisos diversos, comparten un conjunto de valores ético-políticos de la comunidad.

Conquistar la ciudadanía plena, esto es condiciones jurídicas y políticas suficientes para asegurar el reconocimiento y efectivo ejercicio de todos los derechos, en particular los personalísimos sobre la libertad del cuerpo, aparece como un reto de la hora actual y constituye uno de los propósitos más claros para los feminismos en las democracias modernas, porque es justamente la esfera de los derechos y garantías la que otorga el anclaje jurídico y político esencial para avanzar y consolidar procesos de inclusión de las sujetas sociales. La cuestión es qué entidad y qué alcance es otorgado a esa plataforma de derechos de manera tal que pueda sentar las bases de un modelo cívico inclusivo pero a la vez transformador de la desigualdad, esto es que reconozca las particularidades de género en el marco de una democracia plural y sobre la base de la autonomía de la mujer como sujeta de derechos (Levín, 2010)

Noción de ciudadanía y su reaparición en el debate público.

El punto de partida en la definición del concepto de ciudadanía es la que brindó Thomas Marshall a finales de los años 1950. Siguiendo su razonamiento la ciudadanía implica el goce de los derechos formales y la garantía establecida sobre los mismos, a fin de construir como lo aseguraba el teórico clásico de la ciudadanía, una sociedad de iguales. La ciudadanía sólo era posible, desde su perspectiva, en una sociedad en donde tanto los bienes materiales como simbólicos estuviesen distribuidos de tal manera que no existieran entre las personas desigualdades económicas y sociales extremas y que todxs participaran de una “cultura común”. La noción marshalliana suponía entonces un Estado garante capaz de compensar la desigualdad real entre lxs sujetxs, a la vez que estaba edificada sobre la hipótesis de que la

igualdad constituía la base de la condición ciudadana. Sus dos supuestos anclados en la noción de igualdad, han entrado en una crisis profunda tanto por el aumento de las desigualdades sociales cuanto por el auge de las diferencias. (Brown, 2007)

La ciudadanía moderna nace con las revoluciones burguesas, la forma política que asumieron los Estados después de éstas revoluciones, fue la transformación necesaria y la legitimación político-ideológico para desarrollar un nuevo modo de producción: el capitalismo. La separación de trabajo y capital, fundamento del modo de producción capitalista, necesitaba de hombres libres para vender su fuerza de trabajo en el mercado. Y eso fue lo que legitimó el contrato social en el plano político cuando, revocando las ideas de las desigualdades “naturales” proclamó la igualdad y libertad para cada individuo. Nace así la idea de un ciudadano como un sujeto portador de derechos.

Con sus avances y retrocesos la historia, particularmente de los países desarrollados, parecía mostrar que era posible reconciliar, aunque fuera relativamente, la contradicción capitalismo-democracia; las tendencias excluyentes del mercado y las incluyentes de la democracia, la desigualdad social y la igualdad política

Esta época en donde parecía haberse encontrado la fórmula para la convivencia entre capitalismo y democracia, es conocida como la edad de oro del capitalismo y representada por el keynesianismo. Sin embargo, ese compromiso entró en crisis entre los setenta y los ochenta, y junto con ese declive, la aparición de las diferencias, la conmoción de los parámetros de la política y la idea del sujeto construidos durante la modernidad. Entonces, mientras se expandieron mundialmente la democracia y el capitalismo, comenzaron también a ser duramente criticados. La noción de ciudadanía de Marshall opera y sirve como puntapié para comprender los debates actuales porque son los dos supuestos principales con los que él había construido esta noción los que, con el declive de los Estados de bienestar, entran en crisis. Es decir, la idea de igualdad como una idea reguladora vigente ha entrado en crisis tanto del punto de vista de aumento exponencial de las desigualdades y en cuanto a la noción de “cultura común” ha estallado por el auge y la explosión de las diferencias no socio-económicas.

Como se menciona anteriormente, en los años setenta, la crisis económica agudizó la percepción de injusticia desde diferentes frentes y entró en colisión con la idea de igualdad como una idea reguladora vigente. Como afirma Rosanvallón (1997, p.107) *“lo que puede hacer intolerable las desigualdades no es tal vez tanto su crecimiento como un debilitamiento de la percepción del principio mismo de igualdad que las legitima, o la impresión de que ese principio ya no está verdaderamente en vigor”*. (Brown, 2007)

Todo ello, profundizado y complejizado por los cambios sociales y culturales propios de los años sesenta y setenta, la época del amor libre, la revolución sexual, la revuelta juvenil en un momento donde todo parecía posible. No se trató solo de un tema económico, aún cuando se resolviera el conflicto económico quedaría un problema social y político que requiere atención. Junto con la erosión de un sistema de relación capital-trabajo han sido erosionados varios de los supuestos que permitieron desde el punto de vista social e ideológico político el desarrollo del capitalismo. Entre ellos, unas determinadas relaciones familiares, basadas en la contracara del contrato social que los movimientos feministas, entre otros, han trastocado radicalmente.

Lo que se encuentra en el fondo de las discusiones es que la democracia es posible en un contexto en el que se produce el efecto paradójico de una ampliación de derechos formales a la vez que se deterioran las condiciones de vida para amplias mayorías y el Estado se retrae, dejando cada vez más bienes y derechos liberados al mercado. Los procesos de ciudadanía dependen cada vez más de tener dinero, poder, influencias que permitan el real ejercicio de los derechos.

La ciudadanía apunta a la definición de la identidad de lxs individuxs en el espacio público, como sujetx de derecho y obligaciones. En la ciudadanía moderna en el mismo proceso que el/la sujetx es investido de igualdad formal, todas sus determinaciones reales (clase, raza, etnia, sexo, género, entre otras) se sustraen del ámbito de las diferencias a ser consideradas en ese espacio público y se recluyen en el espacio privado. Público y privado es una distinción que se instituye como la gran dicotomía liberal. La segunda característica de esta ciudadanía moderna es que sólo tiene sentido en el marco de los estado-nación. (Brown, 2007)

La pregunta acerca de quiénes pueden considerarse ciudadanxs admite ser abordada desde distintos enfoques o ángulos, según donde se ponga el énfasis se corresponden con un pliegue más liberal o más republicano de la concepción de ciudadanía. Una pone más acento sobre los derechos y la otra sobre las obligaciones, la pertenencia a tradiciones diferentes también supone concepciones distintas de la libertad y la noción de sujetxs, además supone posiciones parcialmente disímiles respecto al papel que cada una le otorga al Estado y su capacidad para intervenir en “la cosa pública” así como también la definición de ésta última.

Se muestra por un lado una tradición liberal ligada al contractualismo cuyo sujeto es un/a individux que puede elegir sus propios planes de vida en un mundo de libertad en un sentido negativo (como no intervención externa) en el cual lxs individuxs gozan de una amplia gama de derechos. Si esos derechos son promocionados o promovidos por el Estado en tanto garante, o no, es lo que diferenciará a los liberales y los liberales sociales o igualitaristas del estilo de Marshall o Rawls.

Por otro lado, encontraríamos a la tradición cívico-republicana, que ha sido revitalizada en los últimos tiempos a fuerza de intentar vencer la apatía cívica de lxs ciudadanxs o la escasa participación de lxs mismxs en las actividades públicas, o que se resisten a participar de los espacios colectivos debido a la creciente fragmentación social. Además, esta tradición implica otra serie de cuestiones que tienen que ver con los deberes cívicos, virtud republicana, la libertad positiva que supone la sumisión a la voluntad general roussoniana y una constitución diferente del sujeto político que sólo se convierte en tal en la esfera pública (Brown, 2007).

Levín (2010) al igual que Brown, detalla un tercer enfoque sobre ciudadanía, el enfoque comunitarista. Y agrega uno más: el enfoque pluralista, éste último será de acuerdo al cual se desarrollará esta producción escrita.

El enfoque comunitarista, basa su teoría en la noción de identidad de las personas, producto de la comunidad a la que pertenecen, su cultura y su tradición y la concepción del bien compartida por sus miembrxs. Identidad y bien común sustentan la plataforma de reglas, procedimientos políticos y jurídicos que regulan la convivencia ciudadana. Su propuesta es la recuperación ética de la comunidad. Desde esta visión, la ciudadanía es concebida como adhesión a la comunidad, definida ésta por rasgos prepolíticos y revitalización de valores tradicionales. Lo que se trata de advertir al liberalismo, desde otras opciones filosóficas, es que las sociedades necesitan afirmarse en un conjunto de valores que presiden a las relaciones sociales en sí mismas. La neutralidad del Estado presenta el riesgo de postular una sociedad apática y escéptica por ausencia de metas y valores comunes, proclive a la violencia y a la intolerancia política. Se proclama entonces la necesidad de instalar la política del bien común conforme a la forma de vida propia de la comunidad. (Levín, 2010)

El presente trabajo se apoyará sobre enfoques plurales de ciudadanía. El liberalismo ha contribuido a la formulación de la ciudadanía universal con base en la afirmación de que todxs lxs individuxs nacen libres e iguales, pero también ha reducido la ciudadanía a un status meramente legal, señalando los derechos que lxs individuxs sostienen en contra del Estado. La esfera pública de la ciudadanía moderna fue construida con un formato universal y racionalista que neutralizó el reconocimiento de la división y el antagonismo y relegó a lo privado toda particularidad y diferencia. En esta línea de pensamiento, la distinción público-privado, central para la afirmación de la libertad individual, funcionó como un principio de exclusión.

Por su parte, la concepción republicana de ciudadanía, es más activa ya que pone su énfasis en la participación política y en la noción del bien común, independientemente de los deseos e intereses individuales. Esta noción resulta incompatible con la demanda de pluralismo, constitutiva de la democracia moderna. De acuerdo a Levín (2010) hoy no se pueden negar las

identidades particulares para acceder a un punto de vista donde predomine el individuo abstracto y universal. El/la ciudadanx democráticx solo puede ser concebidx en el contexto de un nuevo tipo de articulación entre lo universal y lo particular de acuerdo con una modalidad de universalismo que integra las diversidades horizontalmente, la idea es indicar que lo universal se inscribe en el corazón de lo particular y el respeto de las diferencias.

Es a través de la “democracia plural”, desde donde se articula un modelo de ciudadanía que trata de definir nuevos usos y nuevas significaciones para la idea de libertad e igualdad. Esta propuesta está centrada en que una política democrática debe multiplicar los espacios en los que las relaciones de poder estén abiertas a la contestación democrática y para ello se requiere una hegemonía de valores democráticos que se puedan viabilizar en múltiples prácticas democráticas, institucionalizándolas en relaciones sociales variadas, de modo que pueda generarse una multiplicidad de posiciones subjetivas desde una matriz democrática.

La ciudadanía desde este enfoque es concebida como identidad política que se crea a partir de la identificación con la comunidad pública y no es simplemente un status legal abstracto ya que no pone todo el énfasis en los derechos, sino que avanza desde ese reconocimiento hacia la identificación de ciudadanía con identidad política, con una comunidad de valores compartidos en el espacio público.

Se trata de una concepción de ciudadanía que apunta a la construcción de un “nosotrxs” a partir de una identificación común con una interpretación democrática de los principios de libertad e igualdad. Esta construcción se establece sobre las bases de una cadena de equivalencias entre sus demandas a fin de articularlas con los principios democráticos de libertad e igualdad. No se pretende una mera alianza de intereses particulares sino de modificar realmente la identidad misma de estas fuerzas. (Levín, 2010).

En la democracia moderna el vínculo de ciudadanía surge con la identificación de los principios éticos-políticos, por lo tanto, puede haber tantas formas de ciudadanía como interpretaciones de esos principios. Entonces, la ciudadanía puede contribuir a la extensión de los principios de libertad e igualdad y garantizar un modelo inclusivo. Pero en ese modelo lxs sujetxs disponen de libertad sobre sí mismxs, ya no tienen una relación de dependencia con el cuerpo colectivo, tienen una “independencia privada” (autonomía) respecto de la totalidad, y su entidad ciudadana se define por su identidad política común. Esa identidad política sintetiza independencia privada y aspiraciones públicas compartidas.

El caso argentino.

Desde la perspectiva de Marshall la conquista de derechos es gradual y ascendente, pero hay que contextualizar que él habla de una situación particular: la de Inglaterra. La situación de la

ciudadanía en nuestro país dista bastante de haber seguido esa línea evolutiva. Más bien aquí ha sido producida por una serie de fracturas y fragmentariedades, que es preciso tener en cuenta para entender los dilemas y tensiones que el tema de los derechos y la ciudadanía porta para la sociedad toda pero especialmente para las mujeres.

El régimen democrático vigente en nuestro país fue edificado sobre las ruinas de una derrota militar sobre el fin de un gobierno dictatorial, el más brutal, de una serie de gobiernos militares que signaron la historia de nuestro país desde que se produjera la primera interrupción del orden democrático en el 1930.

El denominado Proceso de Reorganización Nacional puesto en marcha en 1976, marca un punto de inflexión en la historia del país, en las que separa las políticas desarrollistas-industrialistas, forjadas en el contexto internacional de consenso keynesiano, de las políticas neoliberales que han sido impuestas desde entonces. De lo que se trataba no era lograr respaldo social sino de disciplinar tajantemente a toda la sociedad. La dictadura produjo profundos cambios económicos al mismo tiempo que una traumatización subjetiva debido a la metodología represiva empleada que incluyó la desaparición sistemática de personas, cuyos efectos perduran hasta hoy. Este régimen culminó tras la finalización de la Guerra de Malvinas en 1982, este proceso fue abrupto y la idea de una ruptura total respecto del régimen dictatorial se instaló en la sociedad generando un consenso democrático inaudito que fue también una característica peculiar de la transición argentina. (Brown, 2007)

En síntesis, el régimen dictatorial establecido en el año 1976 significó el levantamiento total del régimen de derecho y de todo tipo de garantías ciudadanas. Es recién en el año 1983 con la restauración democrática, que la cuestión de los derechos y la ciudadanía se instalan en el debate de lxs argentinxs. Por lo tanto, no es extraño que la mayor preocupación y el énfasis hayan sido puestos en asegurar la vigencia del régimen de derecho y las reglas del juego de la democracia.

Condiciones para el debate.

En tiempos en que la democracia como forma de gobierno dominante parece haber venido para quedarse lo que se discute es qué y cuál democracia. Ante el desmantelamiento de los Estados de Bienestar y la imposición de los modelos neoliberales, se produce una creciente privatización de los asuntos públicos, vía mercantilización y retorno de asistencias voluntarias y por lo general feminizadas. La expulsión a los márgenes de un número importante de individuos ante el fenómeno de la exclusión social y la retirada del Estado deja, en muchos casos el cuidado de lxs más débiles, antes beneficiarxs de políticas públicas, en manos de las mujeres. (Jelin, 1997)

Este conjunto de transformaciones está relacionado con el fenómeno de la globalización y las conmociones que ello ha implicado en el nivel macroeconómico. Pero la globalización dista de ser un fenómeno con significados únicamente económicos, lo que se ha producido al mismo tiempo es un cambio en las relaciones entre política y economía.

Esta gran transformación no puede reducirse a la mera expansión e internacionalización de los mercados, o al surgimiento de un nuevo derecho internacional. Las sociedades contemporáneas han sufrido una transformación en el orden interno porque están atravesadas por nuevas fragilidades y marcadas por formas nuevas de desigualdad. Desde el punto de vista de Fitoussi y Rosanvallon (1997) fallan las instituciones que hacen funcionar el vínculo social y la solidaridad, las formas de la relación entre economía y sociedad y los modos de constitución de las identidades individuales y colectivas. (Brown, 2007)

Estos fenómenos son los que ponen nuevamente en discusión los temas relacionados a la ciudadanía: individuxs, contrato, derechos, democracia.

Críticas al concepto de ciudadanía.

Alrededor de la noción de ciudadanía se han dado una serie de debates desde diferentes disciplinas y enfoques teóricos, que han sido abordados por distintas posiciones político ideológicas. La noción liberal democrática del derecho a tener derechos de Marshall, ya no se acepta sin más y ha sido criticada desde los más diversos ángulos políticos y sociales.

El presente trabajo se ubica desde una perspectiva feminista. Como se mencionó anteriormente, la idea de un/a ciudadanx como un/a sujetx portador de derechos nace con la separación de trabajo y capital, fundamento del modo de producción capitalista, que necesitaba de hombres libres para vender su fuerza de trabajo en el mercado. Eso fue lo que legitimó el contrato social en el plano político cuando, revocando las ideas de las desigualdades “naturales” proclamó la igualdad y libertad para cada individux.

El contrato social del nuevo orden supone la voluntad de individuxs libres e iguales que consienten en limitar su libertad a través del establecimiento de un pacto que garantice a todxs seguridad y protección de la propiedad especialmente.

“Ahora bien, para que este contrato tenga valor y legitimidad debe ser realizado entre individuos libres e iguales que puedan someterse al orden de la ley, a un orden general, universal y razonable. Condiciones todas aquellas que al parecer, según Jean Jacques Rousseau (y no era ni fue finalmente el único), las mujeres no cumplían. Efectivamente, las mujeres quedan excluidas de la posibilidad de firma el pacto aunque incluidas, mediante el tutelaje, su contracara y, recluidas en el espacio privado y familiar. Para acceder al mundo público, a la civilización, era menester pasar de las

pasiones y sentimientos particulares (de los que las mujeres no pueden desprenderse, según la versión roussoniana), y actuar de acuerdo a la razón universal. El lazo que establecerán las féminas con el mundo público, se ha dicho, no será posible a partir de sí mismas sino a partir del varón, jefe del hogar.” (Brown, 2006, p.3)

Se comprende así que la diferencia sexual que ha tendido a mostrarse como impolítica o no relevante en el orden de lo político de acuerdo a la versión clásica del contrato es, perfectamente política. La anatomía, el cuerpo, la diferencia sexual no es irrelevante dentro del terreno político sino justamente lo contrario: es y se constituye como una diferencia política, que se traduce en desigualdad y privilegios.

Las mujeres de esta forma son y no son ciudadanas y miembros del Estado, su expulsión a la vida privada y su perpetua minoría de edad están relacionadas con el lugar que le fue asignado en el estado de la naturaleza sumado a una particular anatomía que las hace incapaces de dejar sus pasiones e instintos, e incapaces por lo tanto de razonar y de sujetarse a normas generales y universales.

“El hecho es que, atendiendo a esta dicotomía naturaleza- cultura; mujeres- varones; afecto (pasiones, sentimientos)- política; particularidad- universalidad, se conformaron dentro de la sociedad civil dos ámbitos, dos esferas (la pública y la privada) que ocuparon su posición respectiva en el orden dicotómico así establecido. Varones públicos y mujeres privadas, evidentemente la fórmula de oro de la modernidad, lo que permitió excluir con “naturalidad” a las mujeres de los empleos, del ejercicio legítimo de la autoridad, en pocas palabras: de los asuntos públicos. Fue también la fórmula a partir de la cual se instituyeron los mitos de la maternidad, la pasividad erótica, el amor romántico como ejes constitutivos de la feminidad.” (Brown, 2006, p. 5)

Debe reconocerse el límite que tiene la noción de ciudadanía en el cuadro de la universalidad de derechos que se abrió paso desde fines del siglo XVIII y su contraste con el significado actual de ciudadanía. Ha sido sobre todo la crítica feminista la que cuestionó la ‘universalidad de la ciudadanía’, una falacia conceptual, pues las mujeres quedaron afuera del sistema representacional político, de la misma manera que inicialmente quedaron apartados analfabetos y quienes no poseían bienes raíces en la mayoría de nuestras sociedades.

Pero, a diferencia del resto de las exclusiones que en la nueva sociedad burguesa pueden eliminarse o redimirse en función de los “méritos” individuales, la exclusión de todas las mujeres de la esfera pública y de la ciudadanía en función de su género se entiende como perpetua, no modificable y no contradictoria, por derivar de la naturaleza y de las diferencias

esenciales y naturales entre mujeres y hombres, que hacían de las primeras seres no independientes, no autónomos, y casi no racionales.

Ciudadanía, debate contemporáneo.

Como se ha mencionado anteriormente, la idea de ciudadanía que Marshall sostuvo sólo era posible en una sociedad en donde tanto los bienes materiales como los simbólicos estuviesen distribuidos de tal manera que no existieran entre lxs sujetxs desigualdades económicas y sociales extremas. Marshall insistía que para que esto fuera posible era necesaria la existencia de un Estado que garantizara los derechos de lxs sujetxs.

Esta idea del derecho a tener derechos ha sido duramente criticada en las últimas décadas desde la nueva derecha, posición que pone énfasis en las obligaciones. Han apuntado directamente hacia los derechos sociales. Defensores del Estado mínimo y auspiciantes de las reformas neoliberales, se oponen fervientemente a cualquier clase de teoría de la justicia que pueda rememorar la idea de un Estado social. Apuntan a la idea de la no interferencia, cualquier intervención del Estado más allá de la garantía de la propiedad y la seguridad es vista como una interferencia arbitraria, y cualquier clase de propuesta redistribucionista como una injusticia.

La idea que subyace es que una versión extrema de libertad negativa, no es razonable. La noción de autonomía, la posibilidad de elegir los propios planes de vida y llevarlos adelante, sin los derechos sociales o las garantías para su goce efectivo o la capacidad de llevarlos a cabo, es impracticable. Sin embargo, una teoría del Estado que sostenga una teoría de la justicia distributiva que permita que todas las personas en tanto ciudadanxs gocen del ejercicio de ciertos derechos básicos independientemente de las fluctuaciones del mercado, no necesariamente garantiza que en ese Estado no habría discriminación o exclusión de personas que por diferentes razones no encajan con el modelo hegemónico de ciudadano propuesto. Por lo tanto, el reconocimiento de las personas como sujetxs de derecho no depende sólo y directamente de políticas de redistribución, aunque las impliquen.

En relación con el postulado de Marshall que implica una cultura común compartida, las condiciones actuales incluyen tanto la cuestión de las diferencias culturales como el tema de las diferencias sexuales. En una teoría redistribucionista se pone la atención en la clase social y en el lugar que las personas ocupan en la estructura socio-económica, el paso de la redistribución al reconocimiento, supone que el eje del conflicto ya no aparece ligado exclusivamente a la clase social, sino que las diferencias en el lugar que las personas ocupan en la sociedad y su calidad de ciudadanía, se encuentra también vinculado a su orientación sexual, su color de piel, la nacionalidad, la etnia, que a su vez pueden influir y ser influidos

(positiva o negativamente) por el lugar que las personas ocupen en la estructura socio-económica. Y a diferencia de los problemas de clase que encuentran su solución en sistemas de redistribución económicos más justos, los asuntos ligados con las diferencias no socio-económicas requieren de soluciones diferentes que se denominan políticas de reconocimiento.

Sea de modo descriptivo o valorativo, un amplio abanico de investigaciones coincide en señalar que el fenómeno del auge de las diferencias, exclusiones o determinaciones no socio-económicas desde el último tercio del siglo XX ocurre, paradójicamente, cuando los llamados Estados benefactores entran en crisis y por lo tanto también muchos de los derechos por ellos garantizados.

Hasta aquí fue una breve descripción del contexto en el cual se ponen nuevamente en discusión los temas como democracia, derechos, ciudadanía. Es junto con la caída del muro de Berlín, el declive del proyecto socialista, las experiencias de los totalitarismos en Europa y las dictaduras en Latinoamérica, que el lenguaje liberal y la democracia se erigen como marco de posibilidad y a la vez como límite para pensar la convivencia entre las personas, los modos de resolver los conflictos y gobernar.

Los debates en el campo de la filosofía política se han dado en torno al núcleo planteado por la concepción liberal de ciudadanía y democracia. Este apartado intentará dar cuenta de los debates y críticas esta noción de ciudadanía definida desde el individualismo, la abstracción jurídica de las diferencias y aceptación de las desigualdades reales, universalidad y neutralidad estatal. Las críticas apuntan al sujeto abstracto y descontextualizado sobre el que se edifica el sistema normativo universal y abstracto, estas críticas han dado pie a un debate que enfrenta posiciones liberales, comunitaristas y republicanas.

Las posiciones liberales se remontan a diversas interpretaciones de la tradición liberal que tiene un centro antropológico único: el individuo, sobre el cual descansa tanto el edificio del conocimiento, como el de la moral e incluso el orden social. La sociedad y el gobierno son creaciones artificiales que vienen a posteriori. No hay idea de comunidad, natural ni política.

Las posiciones republicanas y también las comunitaristas reposan sobre algunos de los supuestos de la tradición republicana clásica. Tomando como punto de partida la sociedad y la existencia del hombre como un animal político, no se preocupan por el origen ni la legitimidad de la comunidad política, sino por explicar su continuidad. La ciudadanía desde la perspectiva republicana no es (como se le adjudica al liberalismo) un conjunto de derechos y obligaciones sino principalmente la participación y el involucramiento en la cosa pública.

Frente al liberalismo, independientemente de por quién sean asumidas, se alzan dos clases de críticas: una epistemológica y otra política. Desde el feminismo también se ha participado

activamente de estos debates y se ha señalado que, ni liberales ni comunitaristas han superado su ceguera en materia de género.

La dificultad para lxs autorxs contemporánx involucradxs en el debate de la ciudadanía radica en precisar qué se entiende por ciudadanía, qué atributos debe portar o porta quien es redonocidx como ciudadanx. De alguna manera los debates rondan en torno a la idea liberal de un sujetx individual sin atributos, con derechos y libertades en un momento y lugar determinados.

Falsa universalidad.

Las críticas que se le hacen a la noción clásica de ciudadanía tienen como vértice al liberalismo. Hasta aquí describí cómo es que la ciudadanía emerge del contrato social en clave liberal e instituye así un Estado de derecho, en el que los derechos son anteriores a los fines constitutivos de la sociedad. Y también expliqué cómo las mujeres son excluidas de contratar, pero incluidas mediante el tutelaje.

La posición liberal servirá como punto de partida, el liberalismo asociado a la libertad negativa se contraponía inevitablemente con una noción de libertad positiva. Si la libertad negativa era una prerrogativa de los liberales, la libertad positiva era la de los republicanos y comunitaristas. Así también, la primacía del individuo es una premisa liberal, mientras que la de lo social y lo colectivo corresponde a posiciones republicanas. Ser libre para posiciones republicanas es actuar de acuerdo a reglas racionales y socialmente impuestas.

Para Rousseau, las normas generales nos hacen libres porque son las que nos hemos dado o nos daríamos si pudiéramos desprendernos de nuestras pasiones o deseos desenfrenados y actuáramos racionalmente. La razón es la esencia de la humanidad para Rousseau, aquella que, en su opinión, las mujeres nunca podrán alcanzar en virtud de su cercanía con la naturaleza, con los deseos y las pasiones, dada la particular capacidad con la que han sido dotadas: la de procrear. Las mujeres serán siempre mujeres y nunca ciudadanas. Encerradas en el mundo de las idénticas al decir de Amorós (1995), e incapaces de trascender la inmediatez de los deseos y pasiones de acuerdo a Rousseau (2006), las mujeres se quedan siempre a mitad camino sin llegar nunca a la adultez total. Medio niñas, medio adultas, siempre tuteladas. (Brown, 2007).

Y será esta supuesta esencia humana definida desde una mirada sesgada y particular, la que será objeto de las críticas feministas, así como también la noción de bien común que de allí se deriva. Un bien común, que aun cuando se declare común y universal, es adulto, masculino, propietario e ilustrado, es decir, un sujeto particular que aparece como universal.

La libertad negativa no ha sido mucho más benevolente con las mujeres, la libertad como no interferencia se fundó sobre la existencia de un ámbito privado lo más amplio posible

resguardado de lo público donde no llegaban las leyes, ni la racionalidad, ni la reciprocidad, ni la igualdad. Allí en ese espacio privado, cuya escena fundacional Pateman (1995) equipara con el momento de nacimiento del patriarcado moderno, se había recluido a las mujeres.

Tanto liberalismo, como republicanismo y comunitarismo aceptan la división del mundo en dos ámbitos distinguibles asignados diferencialmente a varones y mujeres. Un ámbito público y político asignado a los varones, y un ámbito privado, sobre todo de poder, asignado a las mujeres.

En cuanto a la alianza entre libertad negativa y feminismo, tiene que ver con las posibilidades que ésta última ofrecía a las mujeres: ser individuos (diferentes), pasibles de ser tratadas como iguales y capaces de elegir sus propios planes de vida. Y en gran parte sobre esa posibilidad, aunque originalmente incumplida, se ergió el proyecto feminista de la primera ola. Y aún con reformulaciones es sobre esa idea que es posible conquistar una ciudadanía plena para las mujeres.

Ampliando sobre las nociones de libertad positiva y libertad negativa se define a la libertad positiva como la capacidad para perseguir determinados fines o propósitos, la coacción estatal queda justificada en función a algún interés superior al individuo, un interés de la comunidad (ya sea la familia, la iglesia, la escuela o el estado), al que pertenezca ese individuo y que expresa entonces, el verdadero yo individual, al mostrarle el camino que debe seguir.

Y en el caso de la noción de libertad negativa, define la libertad como no interferencia, el grado de libertad que goza una persona sólo podría ampliarse en la medida en que sus fuentes de interferencia fueran cada vez menores y tendieran a desaparecer. Al menos, en su versión extrema. Por lo tanto, el Estado y el Estado de derechos son vistos como esencialmente coercitivos en cuanto restringen la libertad de acción de las personas.

La concepción de libertad que se sostenga no es independiente a la noción de sujetx que se porte. La concepción negativa tiene un/a sujetx unitarix y sin marcas, la positiva tiene su centro en su sujetx centradx y contextualizado, que no elige, sino que descubre quién es a medida que toma conciencia de sí mismx.

El/la individux liberal es un/a sujetx mucho menos atado a la tradición y los preceptos sociales, un/a sujetx que, en términos rawlsianos (1985) tiene una concepción débil del bien que después va dirigiendo, redireccionando y profundizando en base a las elecciones que vaya realizando. Lo que se defiende no es la libertad por ella misma sino el valor de la libertad como un recurso y un valor necesario para poder alcanzar otra clase de proyectos que se consideran valiosos. Al liberalismo se le critica que éstx sujetx individual sea un/a sujetx descontextualizado, un/a sujetx inexistente si se piensa que es imposible que exista tal

individuos en la sociedad, sin culturas, sin tradición, sin ataduras sociales. Mientras que para las posiciones liberales, las diferencias no son relevantes en el orden público, para las comunitaristas ese es el único ámbito donde son visibles y merecen no solamente ser toleradas, sino reconocidas y promovidas. (Brown, 2007)

El desafío es cómo conciliar la igualdad con la diferencia en la esfera pública, un dilema que atraviesa a la mayoría de movimientos y perspectivas teóricas cuyo centro de anclaje se encuentra en torno a las sexualidades. Ese desafío, acerca de cómo considerar las diferencias socio-sexuales, permanece oculto tanto en unas perspectivas como en otras. Individual o social, atomista o dependiente del contexto el sujeto bajo cuestión es un sujeto sin cuerpo y sin marcas, por lo menos a lo que sexualidad atañe.

Capítulo II

Perspectivas feministas sobre el debate de la ciudadanía.

La noción de ciudadanía de las mujeres conlleva tensiones y paradojas ligadas a las marcas dejadas por la tradición liberal, que vincula ciudadano a varón y propietario. La noción de ciudadanía ha implicado, al menos desde su construcción moderna, una operación de sustitución del cuerpo real de lxs sujetxs por un cuerpo construido sobre la base de la abstracción de las marcas de identidad de clase, raza y sexo.

A pesar que la mayoría de los aportes de los feminismos a la noción de ciudadanía tienen en común la crítica a la visión liberal de la democracia y la ciudadanía, la proclama universalista dejó abierta la brecha por donde se abrieron paso las demandas de las mujeres. Ellas son posibles de formular en un mundo en el que, aunque no se cumpla, se proclama como universal e igualitario: educación, trabajo y voto primero; derechos (no) reproductivos y sexuales más tarde son los hitos históricos en el proceso de ciudadanización de las mujeres.

La dificultad reside en la tensión entre abstracción y corporalidad, entre el carácter real de los cuerpos humanos y la inscripción de eso real en un determinado orden político y social. Esta sustitución no es arbitraria sino el producto de relaciones históricas y sociales, es por esto que el modo en que se delimita qué es lo que del cuerpo real puede inscribirse en el cuerpo político es objeto de luchas políticas y sociales. Luchas por hacer visibles las consecuencias políticas de las diferencias entre los sexos, por derribar las barreras de la exclusión, desnaturalizar lo naturalizado, mostrando sus raíces históricas y sus efectos sociales sobre la vida de lxs sujetxs. (Ciriza, 2007)

Definitivamente el contrato social, definido como neutral, tomó la forma de un cuerpo masculino, blanco, adulto, heterosexual, ilustrado y propietario. Pero al mismo tiempo que excluye, el contrato fundante de los regímenes políticos modernos, sienta las bases para el reclamo de lxs diferentes y subalternxs en cuanto a ciudadanxs. Es por esto que desde una crítica feminista a la idea de universalidad y neutralidad, la primer tarea es discutir esos asuntos en una clave que tenga como supuestos el carácter sexuado de lxs sujetxs.

Universalidad y particularidad.

A decir de Levín (2010), entendemos que la ciudadanía puede ser considerada como categoría universal en el sentido de pertenencia de todxs lxs sujetxs a una comunidad política, social y cultural. Pertenencia que se torna viable mediante la facultad universal de contar con la igualdad de acceso a las oportunidades de ciudadanía. Ahora bien, si hablar de ciudadanía

supone considerar la universalidad. ¿De qué manera se deberá tratar la particularidad, derivada de diferencias de raza, género, cultura, edad, religión, sexo, etc., en la construcción de derechos?

Dilucidar este aspecto resulta significativo para poder avanzar sobre la mirada que desde la ciudadanía se hace al problema de la naturaleza y alcance de los derechos de las mujeres. El problema de fondo que se discute es la capacidad de tolerancia que tienen tanto la “universalidad” como la “igualdad” para reconocer y otorgar valor a la diferencia.

Si bien el género es reconocido y la identidad particular del sexo femenino es aceptada, la dificultad que encierra es su instalación en el mundo patriarcal que prevalece, en el cual la identidad de “lo femenino” es lo doméstico privado y en ese contexto las “fallas de reconocimiento” más evidentes son dos: por un lado la incapacidad de reconocer a las mujeres como sujetas de derecho en la vida pública y privada, con intereses propios, que pueden o no ser indiferentes a los roles que su sexo culturalmente les ha asignado. Y por otro lado, la incapacidad de reconocer tanto los valores y las capacidades que participan en las actividades que tradicionalmente se asocian a las mujeres, como la experiencia que han obtenido a partir de esas actividades y el hecho de que la atención que le dedican a éstas pueden aumentar sus propias capacidades intelectuales y profesionales en otros contextos. (Levín, 2010)

Lograr la condición de individuos es fundamental para poder ser incluidas como ciudadanas, además es preciso recordar que la ciudadanía no se define a partir de un conjunto preciso de prácticas concretas, sino que el contenido se va redefiniendo continuamente bajo el imperativo del “derecho a tener derechos”. Es decir, el contenido de las reivindicaciones, las prioridades políticas o los ámbitos de lucha en contra de discriminaciones y opresiones pueden variar, siempre y cuando se reafirme el derecho a tener derechos y el derecho (y el compromiso) de participar en el debate público acerca del contenido de normas y leyes.

Maffía (2002), apunta otro motivo para reivindicar una individuación a la hora de pensar en una ciudadanía con cara feminista. Si pensamos en los derechos sexuales y (no) reproductivos, pensar la ciudadanía de modo individual es importante porque significa que el ejercicio de los derechos de las mujeres no debe estar supeditado al derecho del cónyuge, de la familia ni de la comunidad. Afirmar que tiene derechos es no sólo esperar que esos derechos sean sancionados como leyes sino también que su respeto sea parte de las relaciones sociales y que estos derechos puedan ser petitionados, garantizados y reclamados, cosa que solo ocurre dentro de una comunidad política.

Las diferencias de ciudadanía necesitan un espacio político e institucional, ya que la inclusión y participación de cada persona en la deliberación y en la toma de decisiones públicas

debe contemplar mecanismos de representación grupal. Al mismo tiempo, las instituciones políticas y sociales deben formular derechos especiales orientados a incorporar las demandas diferenciadas de grupos y no a reprimirlas para igualar. De esta manera, el ideal de imparcialidad que sustentan las dicotomías de lo universal/particular, de lo público/privado, de la igualdad/diferencia es interpelado por una nueva concepción de ciudadanía.

Esta idea de ciudadanía diferenciada tuvo gran recepción no sólo por la teoría feminista, logró resignificar la diferencia en la ciudadanía tornando sustantivos los postulados abstractos del liberalismo. Se habla de “ciudadanía amigable” para las mujeres cuyo ideal es integrar elementos del republicanismo participativo y la tradición liberal social de los derechos.

Se trata de considerar los asuntos públicos como el resultado de intereses divergentes, conflictivos, que expresan diferentes necesidades, culturas, historias, experiencias, percepciones de las relaciones sociales. Entonces, no necesariamente la universalidad debe implicar homogeneidad y desconocimiento de la particularidad. Si acordamos, siguiendo a Levín (2010), en que la ciudadanía constituye un proceso de orden conflictivo, que inicia con un vínculo jurídico/político entre el ciudadano y el Estado a partir del reconocimiento de derechos, pero que continúa luego con la asignación de contenido a esos derechos a través de las políticas públicas, atravesado por interferencias e interlocutores de intereses diferenciados; podemos aspirar a que la consideración de la diferencia involucre a lxs actorxs políticos y sociales y por lo tanto sea el conjunto de particularidades lo que de contenido a la agenda de políticas públicas.

La ciudadanía otorga pertenencia y a la vez opciones que se definen en la arena política mediante las decisiones colectivas, quienes no tienen pertenencia a una comunidad no tienen las opciones de ciudadanía, se sitúan en un espacio de incertidumbre.

Público y privado.

El dominio público de la ciudadanía moderna se basó en la negación de la participación de las mujeres. Esta exclusión fue necesaria para sostener la generalidad y la universalidad de la esfera pública, la distinción público/privado primordial para la afirmación de la libertad individual, determinó la identificación de lo privado con lo doméstico y subordinó a las mujeres.

Los cuestionamientos que se vinculan con la tradicional división público/privado y la asignación diferencial de esos espacios a varones y mujeres y la limitación de lo político exclusivamente en la esfera pública, ocupada predominantemente por varones, resultó en una descalificación de las mujeres y las actividades por ellas realizadas en el hogar y en el entorno familiar. Resultó también en la imposibilidad de poner en discusión (hasta no hace mucho) en

el espacio público y político los asuntos relativos a la sexualidad y (no) reproducción de las personas.

Es importante destacar entonces que en la disputa público/privado se dirime un modelo de ciudadanía autónoma o ciudadanía tutelada de la mujer. A principios del siglo XX, las mujeres tenían un acceso restringido a los derechos de ciudadanía. Su participación en la esfera productiva, es decir en el mercado del trabajo, era reducida y quedaban exentas del derecho a la protección social del estado. Los movimientos feministas de la época reivindicaban dos modelos de ciudadanía, uno sustentado en el acceso a recursos propios para alcanzar autonomía y otro en la condición de maternidad concebida como servicio público con función social. (Levín, 2010)

Se produjo en consecuencia una legislación social que, con la finalidad de dar respuesta a las demandas vinculadas a la condición de maternidad, generó una serie de beneficios en carácter de protección paternalista más que como derechos de ciudadanía. Estas iniciativas no lograron instalar las facultades de la mujer en la esfera pública de los derechos de ciudadanía, sino que reforzaron su pertenencia doméstica en la esfera privada, esfera constituida por los afectos, deseos y necesidades corporales.

Los criterios de acceso a la esfera pública eran pertenencia a la esfera productiva, acceso a un trabajo formal y sexo masculino, quienes no cumplían con esos criterios, dentro de estos las mujeres, eran considerados dependientes y por lo tanto sujetos a tutela del Estado y ésta tutela de la mujer no crea una relación independiente con la esfera pública, sino de sujeción a la esfera privada porque no se la reconoce como sujeta de derecho sino como objeto de beneficios por el hecho de ser madre.

A mediados del siglo XX como resultado de varios procesos, entre ellos la lucha del movimiento feminista, se produce una cierta apertura de reconocimiento de derechos de las mujeres en la esfera pública, ese cambio se traduce, por un lado, en que el Estado comienza a ocuparse de regular aspectos de la esfera privada (doméstica) y asume responsabilidades públicas en torno a esas problemáticas: violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, etc. Así mismo, el Estado comienza a asumir responsabilidades que antes estaban a cargo de las familias, en particular de las mujeres, se extiende de esta manera la esfera pública de la ciudadanía, en beneficio de las mujeres que se traducen en contenidos de autonomía ciudadana para éstas.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que los cambios también se inclinan hacia proceso de individuación de la protección, ya que el acceso a la ciudadanía se porta como individuo y no como resultado de un vínculo de familia. Estos datos dan cuenta de una nueva

relación público/privado que, si bien no han superado totalmente los antagonismos, al menos podemos reconocer que están en diálogo y en esta nueva relación la ciudadanía de la mujer está cobrando espacio y significado. (Levín, 2010)

Igualdad y diferencia.

Las sociedades plurales reclaman, como se mencionó anteriormente, instituciones que tornen viable el reconocimiento de particularidades, demandas diferenciadas, como condición para la preservación y desarrollo de la identidad ciudadana. Las nuevas teorías de la democracia tratan el reconocimiento plural y las diferencias y ofrecen distintas miradas y desarrollos teóricos para dar cabida a los nuevos problemas, surgen así nociones de democracia plural, democracia participativa, radical.

La esencia que definió al Estado de Derecho construido por el liberalismo, para garantizar a lxs sujetxs los derechos individuales y limitar cualquier interferencia del poder político o del resto de la sociedad, para el libre ejercicio de sus opciones de vida es lo que hoy da lugar a una paradoja.

“La dinámica social actual necesita que la ciudadanía contemple la heterogeneidad, los ciudadanos son individuos que necesitan que los derechos y las instituciones nombren y efectivicen sus demandas de identidad particular tanto en la esfera privada como en la pública. Pero esto no implica crear tantos modelos de ciudadanía como grupos identitarios existan. Por el contrario, la identidad particular de cada ciudadano precisa de un reconocimiento sostenido en la comunidad general, es allí donde se realza y puede desarrollarse en libertad.” (Levín, 2010, p.60)

La perspectiva multiculturalista entiende a la sociedad política como una pluralidad de comunidades culturales y la convivencia de sociedades plurales no pueden sostenerse mediante la neutralidad estatal, o la omisión de las diferencias. El Estado promueve inevitablemente determinadas identidades culturales y desecha otras, por lo tanto, el Estado no es neutro culturalmente, sino que moldea las diferentes identidades culturales dentro de sí para darle alguna cabida en lo universal.

Por su parte, la libertad individual es necesaria para tener elecciones de vida y esa libertad de elegir presupone disponer de opciones de vida que se ejercitan en las prácticas sociales cotidianas. Quiere decir que la libertad de elección individual es posible porque se asienta en una plataforma cultural que la precede, en síntesis, tomar decisiones sobre nuestras vidas presupone en primer lugar considerar las posibilidades que nuestra cultura nos brinda para ello. En este pensamiento la identidad personal es un producto cultural. En cambio, autores defensores del multiculturalismo definen a la identidad como la interpretación que hace una

persona acerca de quién es y cuáles son las características que la constituyen como ser humano. Esa identidad se transforma en función del reconocimiento social que se tenga o del que se carezca en sociedad. Es decir, el reconocimiento produce identidad, el no reconocimiento produce opresión por negación de la identidad.

La línea sostenida en este trabajo, se relaciona con el desarrollo que aporta Habermas a este debate. Éste contribuye a encontrar un equilibrio entre autonomía individual e intereses colectivos para otorgar a la ciudadanía la capacidad de reconocer diversidad sin tener que resignar libertades. Un punto central es la resignificación del concepto de autonomía que no sólo tiene implicancias privadas, a través de la cual se pretende garantizar a todxs lxs sujetxs la realización de sus proyectos personales de vida, sino que también tiene su correlato en la esfera pública. Ambas autonomías, pública y privada, afirma el autor, se co-originan. (Levín, 2010)

La autonomía pública es ejercida por lxs individuxs libres al definir en sociedad cuáles son sus intereses iguales y establecer acuerdos para tratarlos de manera igual, y cuáles son sus intereses desiguales y, por lo tanto, necesitan recibir trato desigual. Esta postura reivindica el aspecto procedimental de la democracia para re-affirmar la autonomía individual (privada) garantizando su continuidad en la esfera pública a partir del ejercicio de la condición de ciudadanía (autonomía privada).

Este aporte resulta esencial ya que pensar en el ejercicio de la ciudadanía en la esfera pública implica reconocer que la democracia tiene una matriz intersubjetiva que se desenvuelve mediante un proceso deliberativo y participativo, sobre las cuestiones que hace al interés general y que tienen que ser el resultado de una tematización pública. Siguiendo a Levín (2010, p.64), *“El sistema de derechos encuentra en la democracia un canal institucional que prevé y hace posible la ampliación de la ciudadanía a partir del reconocimiento y protección de formas de vida diferenciadas. Esta idea se sustenta en que la integridad de las personas individuales no puede ser garantizada si al mismo tiempo no se aseguran los espacios de intercambio intersubjetivo y los contextos vitales de socialización que conformaron su identidad”*

Son estos argumentos los más próximos al pensamiento feminista de Pateman y Young, cuando sostienen la necesidad de que la democracia de importancia a la identidad sexual en la esfera pública y reconozca una ciudadanía diferenciada para las mujeres.

Las mujeres llegan de manera tardía a la idea de constituirse como sujetas autónomas. Por eso, independientemente de las muchas críticas que la perspectiva feminista pueda hacerse frente a la concepción liberal de libertad, la idea de ser sujetas autónomas, dueñas de su razón

y su voluntad, constituye para las mujeres una deuda a saldar. Por eso es posible de rescatar críticamente la idea de libertad tanto como no interferencia, base de la noción de autonomía liberal como la de no dominación desde una posición republicana. Lo que está en el centro de la noción de autonomía de las mujeres es el cuerpo sexuado.

En nuestro país las dificultades en el proceso de ampliación de la ciudadanía autónoma de las mujeres tienen que ver con una debilidad del Estado de Derecho Democrático, esto es, la incapacidad del Estado para dar vida a las nuevas atribuciones de ciudadanía consagradas en la constitución, las cuales muchas veces son simplificadas en su forma jurídica a proclamaciones de principios desprovistos de garantías políticas que aseguren su cumplimiento.

Ambigüedades en el reclamo del derecho ciudadano de las mujeres.

Como se ha ido dilucidando, la ciudadanía no es sólo el hecho de poseer o no poseer derechos y obligaciones, sino que significa además obtener el reconocimiento de otrx y el primero en otorgar ese reconocimiento es el Estado. Por lo tanto, ser titular de derechos ciudadanos supone dotarse de cierta identidad en el espacio público y, por lo tanto, el lenguaje de derechos será el medio legítimo a través del cual lxs sujetxs incluidxs y excluidxs del pacto fundante de los regímenes políticos modernos, podrán reclamar por su inclusión plena.

El carácter fetichista del derecho reside en que no existe incompatibilidad alguna entre expansión del derecho, juridización de las relaciones sociales y consolidación del dominio, tampoco entre ampliación de derechos formales y ausencia de garantía estatal; no hay ninguna incompatibilidad entre igualdad formal y desigualdad real. El derecho tiene una doble faz: acuerdo racional y libre entre sujetxs autónomxs, y condición de inscripción del sujetx en el orden mercantil, que obliga al trabajador a aceptar libremente las condiciones que ofrece el patrón en el mercado del trabajo y obliga a las mujeres a aceptar, también libremente, contratos de subordinación como forma de relacionarse en las sociedades patriarcales.

El feminismo es un planteamiento que pone en evidencia el carácter patriarcal de la teoría política occidental que se ha sustentado en dos ejes centrales estrechamente relacionados: la separación entre esfera pública y esfera privada, y la elaboración del individux ciudadanx sobre la imagen del varón blanco propietario.

El desarrollo supuestamente neutral del concepto de ciudadanía, ha eludido tradicionalmente la perspectiva de género, es decir, el análisis de los derechos de las mujeres en tanto derechos individuales, en tanto derechos humanos y en tanto que derechos ciudadanos.

Las relaciones de género, en la misma medida que cualquier otro tipo de relaciones sociales, van a estar en la base de las contradicciones sociales e ideológicas que caracterizan el proceso revolucionario burgués y el posterior desarrollo histórico de los liberalismos, tanto desde una perspectiva ideológico-cultural como desde una perspectiva político-jurídica.

Si entendemos que las relaciones de género, como relaciones sociales entre mujeres y hombres, son construidas social y culturalmente, es necesario explicar históricamente, cómo y porqué hombres y mujeres han ocupado lugares asimétricos dentro del conjunto social, en las diversas sociedades y momentos históricos. En este tema, el patriarcado ha tenido una función fundamental entendiendo a éste no sólo como una forma social familiar caracterizada por la subordinación femenina, sino como una forma de construcción de lo público y de la sociedad civil caracterizada también por mecanismos diversos de subordinación femenina.

Frente a esta tradición de pensamiento hegemónico ante la posibilidad de la igualdad y frente a la configuración discursiva de diversas formas de exclusión de las mujeres de la igualdad y de la ciudadanía en los primeros constitucionalismos y en su base contractualista roussoniana, es que los primeros feminismos se fueron desarrollando como tales a partir de la extensión a las mujeres de los mismos principios ilustrados de libertad, igualdad y razón, y por lo tanto, a partir de la universalización real y la radicalización de estos principios. En otras palabras, la negación para las mujeres de los presupuestos igualitarios en los que se iba a basar la modernidad, será la causa de que éstos lleguen a convertirse en presupuestos feministas. (Aguado, 2007).

Por esto, las diversas expresiones de lo que ha sido conceptualizado con la etiqueta de “feminismos”, forman parte de las diferentes culturas políticas y de la evolución histórica del concepto ciudadanía y por eso deben ser analizadas y estudiadas, en tanto movimientos sociales y en tanto que propuestas ideológicas, en la misma medida que cualquier otra perspectiva social o discursiva en el análisis de la teorización y desarrollo histórico de la ciudadanía.

Históricamente y en la realidad concreta, la distinción entre la esfera privada y la esfera pública ha operado como barrera, tanto desde el punto de vista teórico como en el ejercicio concreto de la ciudadanía, la mayoría de las veces de una manera real, otras veces de manera simbólica, delimitando quienes podían ser miembros de la comunidad con capacidad o quienes eran sujetos de derechos políticos del Estado.

Desde la teoría feminista se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones, desde el siglo XIX hasta la actualidad, la construcción general de esta división, hasta tal punto que las críticas a la dicotomía público-privado constituyen buena parte de un debate teórico de los últimos años, que plantea básicamente la necesidad de rearticular ambas esferas. La ampliación

democrática de los derechos de ciudadanía ha sido una cuestión que no sólo ha interesado a las clases medias o sectores sociales acomodados, sino fundamentalmente a los grupos situados a los márgenes del sistema y de la esfera pública como espacio de poder. Y las mujeres lo han estado no como una minoría, sino por razón de su sexo, por la misma dicotomía de lo público-masculino-visible y lo privado-femenino-invisible.

“Así puede parecer paradójico que en estos momentos en los que las mujeres han alcanzado en gran medida el reconocimiento político de sus derechos-al menos en la sociedad occidental-, desde la teoría y la filosofía política se siga reflexionando sobre la cuestión de la ciudadanía de las mujeres, como si éstas no estuviesen reconocidas como tales, es decir, como ‘mujeres ciudadanas’. y efectivamente, a lo largo del siglo XX hemos asistido a la plasmación jurídica del reconocimiento de los derechos de las mujeres como sujetos activos de la ciudadanía; pero ese reconocimiento también ha puesto de relieve que un acceso ‘formalmente’ igual a los derechos no es suficiente, porque se parte de desigualdades previas entre una mitad de la población y la otra mitad- no se está hablando de una minoría más-, y de ahí las propuestas de articulaciones de nuevas vías para satisfacer las demandas específicas de las mujeres, y el objetivo de la igualdad como punto de llegada, y no como algo que se presupone ya ‘realmente’ existente (políticas de acción positivas, políticas de igualdad, sistema paritarios, etc.)” (Aguado, 2007, p.25-26)

En las últimas décadas, desde diversos campo teóricos se han puesto en debate el significado de la ciudadanía, ya no se trata solo del vínculo del individuo en relación a derechos y responsabilidades relacionados con el Estado-Nación que restringe la noción de ciudadanía política, sino que se refiere al conjunto de derechos que comprenden las dimensiones civiles, sociales personalísimas tales como la cuestión de la identidad sexual y los vinculados a la soberanía del cuerpo, incluye ahora los derechos de naturaleza social, cultural, de identidad, de reconocimiento, etc. (Barracos, 2011)

El concepto de ciudadanía es un buen lugar para comenzar a analizar la posición de las mujeres en América Latina en el contexto de los procesos de democratización política surgidos a partir de los años 80. Es importante señalar aquí que tanto la ciudadanía como los derechos están siempre en proceso de construcción y cambio.

Esto implica alertar sobre el peligro de identificar la ciudadanía con un conjunto de prácticas concretas ya sea votar en elecciones o gozar de la libertad de expresión, recibir beneficios sociales del Estado o cualquier otra práctica específica. Si bien estas prácticas constituyen el eje de las luchas por la ampliación de derechos en situaciones históricas determinadas, desde

una perspectiva analítica el concepto de ciudadanía hace referencia a una práctica conflictiva vinculada al poder, que refleja las luchas acerca de quiénes podrán decir qué en el proceso de definir cuáles son los problemas sociales comunes y cómo serán abordados. (Jelin, 1997)

Parte II

Capítulo II

Lo personal es político.

Fue justamente la división entre público y privado lo que las feministas pusieron en discusión bajo el lema “lo personal es político”. La intención era poner en el espacio público temas que habían sido considerados como eminentemente personales e íntimos y por lo tanto, no relevantes en el orden de lo político. El énfasis estaba puesto por un lado en mostrar como aquello que había sido relegado al ámbito privado como el lugar de los afectos y de los sentimientos y por lo tanto ajenos a las acciones del poder, también estaba atravesado por dispositivos de poder.

El orden político moderno se edificó sobre la base de estos supuestos: el dominio sobre las mujeres no es un asunto político, las cuestiones ligadas al cuerpo y a los afectos son asunto privado, esto produjo a lo largo de siglos la privación de derechos para las mujeres. Sin embargo, los cuerpos han sido históricamente objetos de relaciones políticas, evidentemente el cuerpo de las mujeres es mucho más “social” que el cuerpo de los varones ya que se trata de cuerpos apropiados en función de su capacidad reproductiva, por esposos, la iglesia, el Estado.

Durante los años sesenta y setenta de lo que se trataba era de separar la sexualidad de la reproducción, haciendo de la maternidad una opción y no un destino para las mujeres. Se trataba de demostrar cómo las mujeres también producen y no sólo, ni exclusivamente, reproducen. Se trataba de recuperar el sujeto mujer independientemente de su potencial capacidad reproductiva.

Que las mujeres recuperaran su cuerpo, un cuerpo que bajo el mandato de la maternidad obligatoria era un cuerpo para otrxs, sometido al dominio patriarcal, constituía (y aún sigue constituyendo) un punto fundamental y estratégico para la conquista de autonomía, la autodeterminación, la libertad de las mujeres; por lo tanto para remover uno de los puntos centrales en los que se asienta el patriarcado y por ende, la subordinación de las mismas: el control del cuerpo mediante el control de su sexualidad y sus capacidades reproductivas.

En América Latina, la autonomía es uno de los aspectos que más condicionó el desarrollo pleno de la ciudadanía y comprometió gravemente su alcance, no solamente el ejercicio de derechos sino también las modalidades de inclusión social, política y económica de las mujeres.

La autonomía es un supuesto inherente a la definición de ciudadanía, no es posible alcanzar el status de ciudadanía plena si no se pueden ejercer las capacidades involucradas en la toma de decisiones libres. Concebimos la autonomía como capacidad de autodeterminación,

sinónimo de independencia decisoria. Quiere decir que la autonomía define un criterio de inclusión en la ciudadanía, al mismo tiempo que también indica sus exclusiones. (Levín, 2010)

Si bien la autonomía es un atributo que se ubica en la esfera de las libertades individuales, se ejerce sin embargo en la vida pública a través de la mediación de las instituciones. No obstante, esta mediación en un sistema democrático tiene las garantías que prevé el Estado de Derecho para el ejercicio de las libertades ciudadanas. Se han producido avances en diversas esferas de derechos de ciudadanía, pero no son suficientes para garantizar el desarrollo pleno de las capacidades soberanas de la mujer.

Es justamente por las relaciones de poder y dominación que se encuentran asociadas con los cuerpos, el ejercicio de las sexualidades y las capacidades reproductivas de las mujeres que este problema, relegado a la esfera privada es puesto en discusión por las feministas y el movimiento de mujeres como un asunto político y de derechos ciudadanos.

Herederas de una lucha.

Para comenzar este apartado se harán algunas aclaraciones en torno a dos conceptos: género y patriarcado. Ambos términos son centrales en la teoría feminista y fueron acuñados en la segunda mitad del siglo XX, respecto al género podemos decir que surge a partir de concebir que ni lo femenino ni lo masculino dependen de determinismos biológicos, sino que son construcciones históricas, sociales y culturales, este concepto viene a desmontar las ideas y prejuicios que afirmaban la determinación biológica de los ámbitos y conductas esenciales de mujeres y varones. Por otro lado, no hay que perder de vista que los géneros se encuentran jerarquizados, siendo lo masculino lo dominante y lo femenino lo subordinado; es en este sentido que puede hablarse de un sistema de dominación y hegemonía masculina, que el feminismo, a partir de los setenta, utiliza el término patriarcado como aspecto fundamental de su análisis de la realidad. (Burton, 2013)

En feminismo para principiantes, Nuria Varela (2005) cita al patriarcado como forma de organización económica, política, social y religiosa, que se sostiene en la idea de autoridad y liderazgo del varón y que supone la hegemonía masculina por sobre la femenina, surge de una toma de poder histórico por parte de los hombres quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto, lxs hijxs, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetúan como única estructura posible. (Burton, 2013)

Esta concepción del patriarcado como sistema político que se expande sobre amplias esferas de la vida, incluso atravesando la cotidianeidad y la intimidad de las relaciones (de familia, sexuales, laborales, etc), explica por qué las feministas popularizaron la idea de que lo personal

es político y este movimiento ha mostrado el potencial revolucionario que le es intrínseco, ya que no sólo cuestionan la opresión producto del capitalismo sino que cuestionan también la opresión producto del sistema patriarcal. Por su posición social en el mundo de lo privado, son ellas las que tienen intereses creados en modificar no solamente las relaciones de producción sino en subvertir también todo el orden ideológico y la calidad de las relaciones humanas. Este movimiento se niega a la separación del mundo de lo público del mundo de lo privado, transformar las relaciones personales también es hacer la revolución.

Generalmente, se encuentra la historia del feminismo explicada a través de la metáfora de las “olas”, como los flujos históricos de mayor crecimiento del movimiento. La primera ola está caracterizada por el surgimiento, a finales del siglo XVIII, de las reflexiones y acciones en clave feminista, cuyas reivindicaciones más destacadas eran el derecho a la educación, al trabajo, derecho al voto, derechos matrimoniales y respecto a lxs hijxs.

La segunda ola está marcada por el surgimiento del movimiento sufragista, cuyo origen y destino era, básicamente, conquistar el derecho al voto para las mujeres. Una tercera ola estaría constituida por emergencia de un feminismo radical en los sesenta y setenta. Algunas de sus aportaciones más importantes son la politización de la sexualidad y de los cuerpos de las mujeres, la emergencia del concepto de Patriarcado, la teorización de la situación de las mujeres en términos de opresión, etc. (Fabbri, 2013)

Luego, de acuerdo con Fabbri (2013), podríamos hablar de la emergencia del movimiento de las mujeres negras, del entrecruzamiento de movimiento feminista con la lucha de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero, contra la pandemia del VIH-SIDA, por los derechos civiles, contra el régimen político de la heterosexualidad obligatoria y la despatologización de las identidades de género no heteronormativas. Y particularmente, en el contexto latinoamericano y argentino, de la emergencia de un feminismo popular, extendiendo hacia y apropiado por las mujeres de los sectores populares que protagonizaron las experiencias de resistencia al neoliberalismo y fueron problematizando progresivamente sus experiencias en tanto mujeres, aproximándose a las perspectivas feministas.

La movilización política de las mujeres ha tenido una larga historia en América Latina, desde las guerras libradas contra España a principios del siglo XIX, hasta la guerra de guerrillas de las décadas del sesenta y setenta, las mujeres han estado activas en movimientos políticos amplios. Resulta enriquecedor entonces, hacer un breve repaso de los movimientos que ampliaron los márgenes de su ciudadanía.

La historia del feminismo latinoamericano se remonta por lo menos un siglo a las campañas sufragistas. Al igual que en los Estados Unidos, el movimiento sufragista fue liderado por

mujeres de clase alta y media alta y produjo una agenda reformista en vez de una guerra social radical. El derecho al voto fue concedido a las mujeres sobre bases que tenían poca relación con ideales feministas.

Cabe señalar que el movimiento feminista y de mujeres, como formas específicas de organización de las mujeres para reclamar por y defender sus derechos, tuvieron un nuevo auge a partir de la década del sesenta, principalmente en los países capitalistas occidentales. A lo largo del siglo XX, el espacio público en tanto terreno que históricamente se reservó al privilegio masculino, se fue abriendo a la participación femenina, en este sentido, las mujeres se fueron incorporando a la arena pública progresivamente y desde diversos lugares: aumento en los niveles educativo, feminización de la matrícula universitaria, mayor participación en el mercado del trabajo, tendencias que se manifestaron con fuerza en los años sesenta y setenta en casi todo el mundo. (Jelin, 1994)

En este mismo contexto retorna en la década del sesenta en Estados Unidos y Europa, y en la del setenta en América Latina, el feminismo perteneciente a la Segunda Ola, caracterizado por expandir los límites de la definición de lo político para que incluya las vidas cotidianas de las mujeres: la sexualidad, la maternidad, el cuerpo, el trabajo doméstico. En este sentido el feminismo busca politizar lo personal. En la segunda mitad de los setenta y primera mitad de los ochenta hay tres procesos históricos que convergen en la definición del contexto de la acción pública de las mujeres latinoamericanas, por un lado los procesos de democratización política y social; por otro lado, una creciente atención y movilización internacional referidas a la condición social de las mujeres y, por último el cambio en el contexto económico mundial, con la crisis del Estado de bienestar, las políticas de ajuste y sus efectos en términos de desigualdad social.

Teniendo en cuenta el particular contexto latinoamericano, en este trabajo se hará una historización del movimiento de mujeres en Argentina desde el regreso de la democracia, vistos éstos como un pilar fundamental en la ampliación de derechos y responsables de la consecución de muchos de los derechos que poseen hoy las mujeres y esenciales en la lucha por los que aún faltan conseguir dentro de los cuales el aborto voluntario, históricamente y sobre todo en la actualidad, se convierte el principal reclamo.

Es interesante recuperar la denominación de “feminismo nuestroamericano” que va en consonancia con la metodología propuesta, de un conocimiento situado que se corre de la pretensión objetivista que caracteriza al pensamiento androcéntrico, patriarcal y colonial. Esta noción surge del seno de las luchas de movimientos sociales y populares de América Latina, posibilitando, como señala Fransesca Gallo (2011), abrir *“el nominativo a los pueblos y*

culturas que quedan fuera de la raíz lingüística latina, principalmente pueblos originarios y afrodescendientes, para que se incorporen a nosotros/as desde su voluntad de pertenecer a un colectivo incluyente” (Fabbri, 2013)

La decolonización emerge como preocupación central entre las pensadoras y activistas feministas en América Latina y el Caribe. Así la perspectiva epistemológica del conocimiento situado, se inscribe en una búsqueda autónoma de las protagonistas del cambio social en Nuestra América, que desde la reflexión desde sus prácticas desafían las relaciones de saber-poder que intentan sustituir sus voces. Es que la pretensión colonizadora no sólo provino del poder patriarcal sino también del feminismo ilustrado, blanco, heterosexual, institucional y estatal que establecieron sus experiencias particulares como medida universal, escondiendo y reproduciendo su posición de hegemonía respecto a las mujeres subalternas.

Respecto al carácter anti-hetero-normativo de “nuestro feminismo”, fueron las activistas lesbianas quienes interpellaron la naturalización de la heterosexualidad como régimen político por parte de una mayoría del movimiento feminista que habitualmente restringe la problematización de las relaciones patriarcales a las relaciones heterosexuales, a los derechos sexuales y reproductivos y la maternidad, en una agenda que no siempre contiene a las lesbianas y acaba reproduciendo la invisibilidad a las que son sometidas por el heteropatriarcado y en el mismo sentido han aportado activistas LGBT/queer. (Fabbri, 2013)

Características del movimiento de mujeres en Argentina con el retorno de la democracia.

En este trabajo interesará particularmente la caracterización y rol del movimiento de mujeres a partir de la década del ochenta con el retorno de la democracia. Luego de una década larga de gobiernos autoritarios en los años sesenta y setenta, se dio un viraje importante hacia la democracia a finales de los años setenta y en la década de 1980, y los gobiernos militares fueron reemplazados por regímenes constitucionales civiles. Este trabajo sostiene, en coincidencia con Jaquette (2006), que el período de transición de una dictadura militar a un gobierno democrático no corresponde a la política habitual, ofrece oportunidades nuevas y plantea limitaciones diferentes. Los movimientos sociales, incluido el movimiento de mujeres, tuvieron una ventaja durante la transición, porque pudieron movilizar a sus seguidores y sacar a la gente a las calles. Las transiciones son aperturas políticas en el sentido más amplio de la palabra porque existe la voluntad general para repensar las bases del consenso social.

Este contexto ofrece a los movimientos sociales la oportunidad para plantear nuevas reivindicaciones y para influir sobre las expectativas sociales, y en cuanto al papel desempeñado por las mujeres: fue la combinación de tres patrones de movilización los que le

han dado al movimiento de mujeres un papel reconocido en las transiciones democráticas de América Latina: los grupos de los derechos humanos, los grupos feministas y las organizaciones de mujeres pobres urbanas. Cada una de estas ramas del movimiento tuvo orígenes y metas diferentes, la oportunidad e inclusive la necesidad de cooperación surgieron de las demandas planteadas por el mismo proceso de transición democrática.

A pesar de sus diversos orígenes y metas, en nuestro país, cada una de estas ramas del movimiento de mujeres converge en una estrategia de oposición al régimen militar, estrategia que las unió. No obstante, cada grupo usó formas diferentes para acceder a la esfera pública. Y, a pesar de sus debilidades y diferencias han tenido mucho éxito en términos feministas, han logrado cambiar la legislación, en especial en el área de la familia, y han creado instituciones nuevas, tanto dentro como fuera del gobierno.

La movilización de las mujeres y el crecimiento de la conciencia feminista ocurrieron durante este período político, con lo cual las agendas de las mujeres y sus estrategias tuvieron un carácter diferente del que hubieran tenido si se hubieran desarrollado en un ambiente de continuidad democrática. Como se mencionaba con anterioridad, este clima político favorecía la cooperación, la movilización y las negociaciones directas entre las mujeres y el Estado. Las feministas niegan la división entre el mundo público de la política y el mundo privado de la familia, en nombre de todas las mujeres de todas las clases. Y, la violación de la santidad de la familia por parte de los militares le confiere un significado muy especial al concepto “lo personal es político”.

En este campo político, plagado de dictaduras y violaciones de los derechos humanos, desde su inicio hubo mujeres al frente del movimiento de derechos humanos, sin embargo, el compromiso de muchas no venía de convencimientos ideológicos explícitos o de cálculos estratégicos en la lucha anti dictatorial. Era una lógica de afecto ya que eran mujeres madres, abuelas o familiares de víctimas, pidiendo y reclamando por sus parientes desaparecidos, muertos, torturados o encarcelados. Pero estas mujeres no se consideraban a sí mismas feministas, su solidaridad y estrategias fueron una extensión de sus papeles familiares tradicionales.

Las organizaciones de derechos humanos fueron conformadas por amas de casa con poca experiencia política previa, las madres, en torno a quienes se solidificó el esfuerzo civil por privar a los militares de su legitimidad política no pretendía romper con la barrera entre lo privado y lo público. Fueron obligadas a ocupar el espacio público de la Plaza luego de fracasar en sus demandas privadas, después de ser ignoradas y ridiculizadas durante cinco años,

recibieron la aclamación popular solamente cuando se hizo evidente que el régimen militar sufría una crisis frontal. (Jaquette, 2006)

El éxito político de las madres constituye un provocativo reto para quienes tratan de explicar la marginación política de las mujeres como resultado de sus valores tradicionales y de sus roles privados, las madres mostraron la forma en que el lazo entre madre e hijxs podría convertirse en la base de la acción política, no solamente convirtieron los recursos morales privados en poder público, transformaron la condición privada en una armadura pública.

El surgimiento de los movimientos feministas en la segunda mitad de los años setenta constituyó una segunda dimensión importante en el crecimiento y la autodefinición del movimiento de mujeres. Una característica de estos movimientos es que fueron formados por mujeres profesionales, muchas de ellas miembros desencantadas de partidos políticos de izquierda por la negativa de sus partidos de tomar en serio los temas de las mujeres, debido a estos orígenes estos grupos estaban comprometidos con la vinculación del análisis feminista en favor de un cambio social profundo. Aumentaron su número y su compromiso con la incorporación de las exiliadas políticas que regresaron de las capitales europeas y norteamericanas con nuevas ideas y nuevos conceptos sobre política feminista.

La tercera dimensión del movimiento de las mujeres en América Latina fue la movilización de las mujeres pobres urbanas. La profunda recesión de los años ochenta causó una gran crisis, los ingresos cayeron dramáticamente, los niveles de endeudamiento externo obligaron a adoptar “programas de ajuste estructural” y recortar la inversión en servicios e infraestructura dirigida a mejorar la situación de lxs pobres urbanos. Como respuesta al declive económico, las mujeres pobres se vieron obligadas a depender de sus propios recursos para asegurar la supervivencia de su familia. Aunque la participación de las mujeres en las organizaciones de barrio no es algo nuevo, el nivel de coordinación entre los grupos locales, la formación de federaciones de grupos con intereses similares y la vinculación de los grupos de barrio a las otras ramas del movimiento de mujeres ubicaron a esta nueva fase de la organización comunitaria en un contexto nuevo y más poderoso.

En esta década, las mujeres pobres urbanas luchan por mejorar las condiciones de sus familias pero sin llegar a constituirse en una fuerza política o socialmente organizada de mujeres que pudiera exigir cambios en sus condiciones de subordinación cotidianas y en su trabajo como mujeres. Existe una brecha entre el conocimiento feminista acerca del patriarcado y los temas relacionados con las supervivencias de la familia, los cuales motivan a las mujeres de los sectores populares; el meollo del asunto está en cómo articular clase y género, intereses prácticos y estratégicos de las mujeres. El concepto de “vida cotidiana” ha contribuido a abrir

el diálogo entre feministas y las mujeres de los sectores populares, los problemas comunes de la vida diaria les permiten a las mujeres comunicarse en términos concretos, este concepto además permitió acceder a los debates políticos que se estaban dando. (Jaquette, 2006)

El surgimiento de los movimientos feministas y la importancia de los temas de organizaciones de mujeres en la política de transición se deben a una combinación única de factores. La crisis política del autoritarismo dio lugar a movimientos sociales y a la exigencia de una política más participativa. Las transiciones fueron marcadas por la apertura y flexibilidad ideológica, esto ofreció un terreno fértil para la crítica social feminista, en tanto que la crisis económica conformó la agenda social del movimiento de mujeres y le facilitó una base de masas.

Durante esta década, la lucha del movimiento feminista y de mujeres consiguió la sanción de algunas leyes en respuesta a las demandas de la Multisectorial de mujeres y así, en 1985 se sancionaron las leyes que estipulaban la igualdad de lxs hijxs extra matrimoniales y la patria potestad compartida entre madre y padre; en 1986, el convenio sobre igualdad de oportunidades para trabajadores/as, con responsabilidades familiares; el divorcio vincular al año siguiente y el derecho a la pensión al cónyuge en matrimonio de hecho, en 1988.

El paulatino aumento de la presencia femenina en las instituciones del Estado (en los poderes Ejecutivo y Legislativo), y la constitución de agendas de género son el producto del entrelazamiento del activismo del movimiento de mujeres (constituido en organizaciones, redes y alianzas diversas) y de la nueva agenda de los estados de la región para aceptar la presión internacional en los temas de derechos ciudadanos.

Al mismo tiempo que la cuestión de las mujeres ingresaba como tal al aparato del Estado, la lógica privatizadora del capitalismo tardío afectaba la naturaleza y también la administración de los derechos de lxs ciudadanxs, transformados en servicios accesibles en función del lugar que se ocupe en el mercado.

La breve primavera democrática, acosada por la sombra del autoritarismo y amenazada por el aumento de las desigualdades, trajo la convicción de que todo debía revestirse de un tono moderado, incluso módico. El terreno de los años ochenta era, en Argentina, diverso del de los años setenta, también en lo relativo a la visibilidad política de las feministas y el movimiento de mujeres, pues estas últimas habían tomado un lugar en el espacio público no sólo por presión internacional, sino también por el protagonismo adquirido en la resistencia a la dictadura. (Ciriza, 2006)

Los noventa.

La siguiente etapa de la historia argentina, inaugura con dos leyes que son: la Ley de Reforma del Estado (Ley 23.696) en 1989, y la Ley de Convertibilidad (Ley 23.928) en 1991. Configurando el punto de partida para el establecimiento de un nuevo modelo estatal, en el que se redefine las relaciones entre Estado, mercado y sociedad civil; así mismo, implica la reorientación del rol del Estado y la reducción de sus funciones mediante la privatización de importantes empresas públicas (principalmente las proveedoras de servicios públicos), su supresión de aquellos organismos que regulan la actividad económica, la tercerización y subcontratación de los servicios y la descentralización de los derechos sociales básicos como salud y educación, traspasando la responsabilidad a los gobiernos provinciales y municipales.

Este marco aumenta la cantidad de organizaciones populares de carácter urbano, que buscan soluciones alternativas y espontáneas a sus problemas. Si bien estos movimientos pueden estar integrados por diferentes sexos, suelen las mujeres cumplir roles protagónicos en cuanto al diseño de acciones inmediatas, concretas y necesarias.

La incorporación de nuevas actoras sociales, provenientes de los movimientos populares que atravesaron la práctica política argentina desde mediados de los noventa está en la base de las articulaciones que dieron como resultado la emergencia de un feminismo popular que surge de la participación de las mujeres en diferentes espacios de lucha y en especial en los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM). A partir de 1997 las mujeres de las incipientes organizaciones de trabajadorxs desocupadxs y de otras organizaciones que surgieron en el segundo ciclo de protestas, comienzan a aparecer en los Encuentros. Los cuales comenzaron a recibir cada vez más la atención de los sectores reaccionarios, la injerencia de la iglesia y de las autoridades provinciales, para impedir que se debatiera acerca de la anticoncepción y el aborto y se cuestionaran las familias y los valores tradicionales del patriarcado. (Di Marco, 2010)

Hacia finales de los ochenta y primeros años de los noventa, las organizaciones feministas y el movimiento amplio de mujeres lograron poner en agenda pública a la violencia contra las mujeres (incluida la sexual). Resultado de esas luchas y de la particular dinámica que se produjo entre el movimiento de mujeres y el estado, se crean leyes contra la violencia familiar (la violencia contra las mujeres fue tomada como violencia familiar), los programas de asistencia a víctimas de maltrato, la reforma del Código Penal en relación a los delitos sexuales y algunas políticas públicas incipientes en relación a la atención de las violaciones.

En 1991 se crea el Consejo Nacional de la Mujer, con estructuras y programas que específicamente abordan las problemáticas de las mujeres. En este sentido, institucionaliza

desde el propio Estado que las mujeres conforman un sector de población con problemas y necesidades específicas; también durante ésta década se reforma la ley electoral y se promueve un porcentaje de cupo femenino en las cámaras, como resultado de la presión y la injerencia del Encuentro Feminista celebrado en la provincia de Buenos Aires en 1991.

Durante esta década los ENM siguieron creciendo en cantidad de participantes y profundidad en las discusiones, de este espacio han surgido múltiples alianzas, campañas, redes de comunicación que demostraron la capacidad de organización de las mujeres para reclamar por el cumplimiento de sus derechos y hacer valer sus reivindicaciones.

Cambio de siglo, las primeras décadas del dos mil.

El modelo económico y social que había empezado a perfilarse con el golpe de Estado en el 1976 y llega a su máxima expresión en la década del noventa, estalla en el país a fines del año 2001. El proceso de reforma estructural que el gobierno de Carlos Menem impulsa y lleva adelante entre 1989 y 1999, tiene como consecuencia el recrudecimiento de las desigualdades socioeconómicas, aumentando la desocupación, la pobreza y la marginalidad social a niveles sin precedentes.

Este modelo político dejó como saldo una fuerte crisis económica y un gran malestar social. La clase política argentina, además de tener poca capacidad de negociación por la obligación de cumplir con las recetas impuestas por organismos internacionales, se encontraba deslegitimada socialmente y el descontento social se hizo sentir. La política enmarcada de las instituciones del Estado fue cuestionada, y las demandas sectoriales de muchos grupos de la sociedad permanecieron insatisfechas.

En este contexto, los grupos que no lograron encausar sus demandas, desbordaron los lugares estables de la política, constituyéndose en movimientos sociales contestatarios que generaron acciones colectivas y comenzaron a transitar los distintos espacios con sus discursos, prácticas y proyectos.

A partir de 2002 se inicia un proceso de transformación política. El gobierno de Néstor Kirchner, y luego el de Cristina Fernández, vuelve a poner al Estado como centro de los procesos de regulación entre la sociedad y el mercado. Genera un cambio cualitativo en la centralidad de esta institución con la promoción de políticas públicas que permitieron recomponer las necesidades y demandas de gran parte de la sociedad.

La relación que se establece entre el estado y la sociedad está mediada por prácticas políticas de las organizaciones/movimientos sociales que generan un proceso de construcción de agenda, en la medida que el estado se define como un espacio de articulación y no de dominación. En este marco, los movimientos de mujeres en la primera década del segundo milenio en Argentina

formaron parte de una agenda que el estado incorpora. Las reivindicaciones más significativas de los movimientos feministas de las últimas décadas son las relacionadas a los derechos sexuales y reproductivos. Autonomía y libertad son dos principios fundantes de la modernidad y cuestionan el sistema de género dominante construyendo disputas de sentido en las instituciones sociales como la familia, la escuela, el sistema de salud, la justicia, entre otras. (Bosio y Frencia, 2017)

En los últimos años, se ha avanzado mucho en la incorporación de las reivindicaciones feministas en las agendas de gobierno y esto sucede por la organización y persistencia del movimiento de mujeres de Argentina y los esfuerzos por democratizar la política en el marco de los gobiernos progresistas que se fueron instalando en América Latina en la primera década de este milenio.

En Argentina, a partir de 2002, se construye un marco normativo que incorpora los derechos de las mujeres en este ámbito. Se aprueban leyes y programas que permiten el acceso a estos derechos como: la Ley Nacional 25.673, de Salud Sexual y Procreación Responsable fue sancionada el 30 de octubre de 2002. Durante este año también se aprobó la ley nacional 25.584, que prohíbe toda acción institucional en los establecimientos de educación pública del país que impida el inicio o continuidad del ciclo escolar a cualquier alumna embarazada.

En el año 2004, se crea la Ley Nacional 25.929 de Parto Humanizado. En 2005 el Ministerio de Salud de la Nación aprobó la Guía para el mejoramiento de la Atención Post-aborto a través de la Resolución 989/2005. En el año 2006 se sancionó la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el Ministerio de Educación de la Nación.

En los espacios internacionales (Mercosur, Acuerdo 06/07, Recomendaciones para las Políticas de Salud Sexual y Reproductiva) Argentina se compromete a la reducción de la mortalidad materna, como un compromiso para cumplir con las Metas de Desarrollo del Milenio y establece el acuerdo de instrumentar y protocolizar el acceso a la interrupción del embarazo en los servicios de salud del país. En cumplimiento de este compromiso, el Ministerio de Salud de la Nación, a través del programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable elaboró en octubre de 2007 una Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles”.

En el año 2009 se aprueba la ley 26.485 “De Protección Integral a las Mujeres para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en sus Vínculos Interpersonales”. Esta ley avanza en el reconocimiento de los diferentes tipos de violencias y en los diferentes ámbitos en las cuales se generan.

Otros avances se realizaron en relación a la diversidad sexual con la reforma del Código Civil para aprobar el matrimonio igualitario en el año 2010. Nuestro país fue el primero de América Latina en reconocer este derecho en todo el territorio nacional. También aportó en este sentido la Ley de Identidad de Género, aprobada en el 2012. Este mismo año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emite el fallo FAL sobre el acceso al aborto no punible, ampliando así la causal por violación, en el código penal, en el artículo 86 dice: *“El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1°) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medio; 2°) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”*. El fallo dictamina que cualquier mujer que ha sido violada tiene el derecho a un aborto no punible, el Ministerio de Salud de la Nación, tomando este fallo produce un protocolo para instruir a sus agentes en esta normativa. Este protocolo sólo se implementa en ocho provincias de la Argentina, con resistencia por parte de gobiernos provinciales y sus organismos de aplicación, el sistema de salud y la justicia.

La incorporación de agenda de género en las políticas públicas del Estado argentino por la presión de los grupos feministas generó en este período, procesos de interpelación al Estado. A partir de la aprobación de estos marcos normativos el Estado Nacional avanza en la agenda de los Derechos Sexuales y Reproductivos implementando políticas que permiten el acceso a estos derechos, aunque se observan todavía muchas dificultades para lograrlos de manera efectiva debido a que algunos agentes del estado que forman parte del sistema de salud y judicial construyen estrategias de resistencia a su aplicación.

El Estado como arena política, en la cual se disputan sentidos, valores y creencias, que se ponen en juego en las prácticas de estos agentes generando avances y obstáculos, también contiene diversos activismos y organizaciones con interpretaciones enfrentadas acerca de estos derechos. Los sectores conservadores y fundamentalistas, ligados al poder de lo religioso operan dentro de la estructura del Estado con estrategias y acciones para frenar el logro de estos derechos.

En otros momentos históricos, hablar de sexualidad y (no) reproducción remitía al ámbito privado, de la familia donde la autoridad en la toma de decisiones era el varón. Llevó mucho trabajo de las mujeres organizadas cuestionar e intentar dismantelar la trama de opresión y sometimientos que se construían en la institución familiar, en el cual el cuerpo de la mujer cobra valor social por su capacidad de engendrar y dar placer.

Los movimientos feministas y de mujeres a través de la lucha, lograron que esa forma de opresión sea reconocida pública y políticamente. El derecho a decidir sobre el cuerpo, la reproducción, el placer y la orientación, identidad sexual fue una batalla cultural que las organizaciones y movimientos desplegaron a partir de la década del setenta. Particularmente la lucha por el Aborto Legal y Voluntario desafía por completo al patriarcado porque, que las mujeres y cuerpos gestantes puedan decidir sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida, que no siempre se encuentran ligados a la maternidad, resulta un tema controversial.

Las feministas y organizaciones de mujeres en nuestro país han sabido potenciar las demandas apoyándose y militando al interior de los movimientos sociales y de sus organizaciones partidarias y han sabido interpelar las agendas de los gobiernos de turno desafiando la incorporación de sus demandas a través de diferentes estrategias de incidencia y en ese sentido interesa rescatar la historia de avances y retrocesos de los derechos sexuales y (no) reproductivos y el reclamo por la IVE en Argentina.

La conformación del pueblo feminista.

Para comenzar a entender de qué manera, en el último tiempo, el reclamo por el derecho al aborto pasa de ser un reclamo del movimiento feminista a ser una reivindicación tomada por gran parte de la sociedad civil, es necesario pensar en la conformación de lo que se denominará un “pueblo feminista”.

Laclau (2005), denomina demandas democráticas a las realizadas al sistema, que reclaman la solución de alguna exclusión y las distingue de las demandas populares, que intentan crear una nueva hegemonía. Si las primeras son satisfechas, se inscriben en la lógica de la diferencia. En cambio, cuando no son satisfechas y se articulan con otras demandas pueden entrar en una relación equivalencial. Cuando el discurso de las demandas en torno a las necesidades se escapa de los discursos hegemónicos, de lo privado, y de la economía de mercado, puede aparecer un momento de demandas fugitivas politizadas (citado en Di Marco, 2010).

Entonces así, como los reclamos por trabajo y en contra de la violencia hacia las mujeres se dirigen a las instituciones y pueden ser satisfechos diferencialmente, el reclamo por la legalización del aborto, como signifiante de la ciudadanía plena de las mujeres, del laicismo y el pluralismo, construye una frontera y sobrepasa los discursos de la hegemonía patriarcal representada principalmente por la jerarquía de la iglesia católica.

Tanto la participación de las mujeres en los Encuentros Nacionales de Mujeres como las estrategias de la Iglesia Católica desde 1997 para obstaculizarlos, aparecen en la base de la radicalización de la propuesta por la lucha para la legalización del aborto voluntario. La articulación política feminista y la de otros movimientos sociales, articulación contingente de

elementos heterogéneos, de demandas diversas como las que constituyen la multiplicidad de los movimientos (piqueteras, obreras de empresas recuperadas, assembleístas, campesinas, indígenas y feministas) dio lugar a una cadena de equivalencias, representada hegemonícamente en la legalización del aborto voluntario que no reduce al particularismo de cada demanda individual. Esta cadena de equivalencias posibilitó que una identidad heterogénea, las mujeres, con todas las particularidades dentro de esa categoría, construya discursivamente un adversario, conformado por las fuerzas portadoras de valores tradicionales y patriarcales y que aparecieran como una identidad política, un pueblo. (Di Marco, 2010).

Las no contadas demandan ser integradas plenamente a la democracia, surgió una demanda que significa a todas las demandas y se articularon las mujeres en movimiento y otras actrices sociales en la pugna por la legalización del aborto voluntario que condensa la lucha por el laicismo, la pluralidad y la ciudadanía.

El nosotras dentro de un nosotros en varios movimientos se articuló con otras demandas y actores, mediante esta articulación se constituyó un pueblo. Recordemos que pueblo, para la teoría de la hegemonía, es un actor histórico potencial, una construcción que constituye agentes sociales y no constituye una expresión ideológica, sino una relación real entre agentes sociales. Este pueblo en palabras de Ranciere (1996), es la cuenta de lxs no contables, la parte de esxs que no tienen parte. Y la definición de quién será consideradx en la cuenta de la democracia es conflictiva, contingente y no está predeterminada. (citado en Di Marco, 2010)

La conformación de este pueblo feminista es horizontal y no presenta autoridades delimitadas, sino situacionales. Las demandas que se articularon favorecieron la emergencia de identidades colectivas diversas, pluralistas y democráticas y se generaron desde multiplicidad de locaciones e identidades particulares encontrando su posibilidad en el feminismo popular que se constituyó en el encuentro de los movimientos de mujeres y feministas, que tuvo su punto nodal en los Encuentros Nacionales de Mujeres y tal multiplicidad tiene su razón de ser en la estructura horizontal y rizomática de los movimientos de mujeres, sus redes y sus articulaciones locales, globales, cara a cara y por el ciberespacio.

La lucha por el derecho al aborto voluntario no es sólo uno más de los asuntos que hacen a la ciudadanía de mujeres, sino un nudo estratégico para una ciudadanización de las mujeres con cara feminista, una ciudadanía que apunte a la defensa de la igualdad de lxs sujetxs teniendo en cuenta sus efectivas condiciones de existencia. El derecho de las mujeres y cuerpos gestantes para decidir sobre sus proyectos de vida, así como la garantía de un estado capaz de respetar tales decisiones y asegurar que ellas puedan realizarse en igualdad de condiciones para todxs, constituye el habeas corpus de las mujeres.

Ha habido un esfuerzo permanente en insertar los temas de las mujeres en las plataformas de los partidos políticos y transformar el compromiso político en política pública. Las actitudes de la opinión pública también han cambiado, la representación de las mujeres en los medios de comunicación ha cambiado notablemente y temas anteriormente considerados tabú, incluidos el aborto y la sexualidad, ahora se discuten en forma abierta. Las costumbres están cambiando y el feminismo ha provisto un marco de referencia nuevo y liberador dentro del cual se pueden evaluar estos cambios.

De las políticas de población a los derechos de las mujeres.

Siempre hubo políticas sexuales porque los seres humanos venimos al mundo en cuerpos sexuados. El tema de la sexualidad y el cuerpo de las mujeres ha estado sujeto a control y ha sido objeto de saberes especializados en diferentes momentos históricos. Aunque no siempre de modo explícito, los Estados aplican y han aplicado en sus políticas una determinada perspectiva de género, históricamente la sexualidad y la reproducción, estrechamente relacionados con la institución matrimonial y familiar, han sido puntos claros y precisos de regulación y control.

Sin embargo, hizo falta que las feministas le pusieran un nombre, hicieran del asunto un tema político, haciéndolo aparecer en el espacio público lo que ha disparado los debates que hoy conocemos y la posibilidad de hacer del tema una demanda por derechos ciudadanos.

Entre los años cincuenta y sesenta la atención estaba centrada en el crecimiento poblacional detectado en los países asiáticos y luego en los latinoamericanos. Para frenar este crecimiento poblacional, que era considerado como una amenaza para la supervivencia del planeta, los países del sur se vieron sometidos a una serie de presiones para bajar la tasa de natalidad tanto por parte de los organismos internacionales como por parte de los gobiernos de los países centrales. En algunos casos, estas presiones internacionales dieron lugar a la imposición de procesos coercitivos de control de la natalidad.

Esta posición tuvo su contracara en la de los llamados pronatalistas, quienes tampoco estuvieron exentos de aplicar métodos coercitivos, mediante campañas contra la anticoncepción, la restricción del uso de métodos anticonceptivos a través de trabas legales y la utilización de distintos tipos de impedimentos para la práctica del aborto, por otra parte penalizados en la mayoría de países de latinoamérica. Lo cierto es que, tanto en uno como en otro caso, las mujeres son consideradas como objeto y no como sujetas activas y protagónicas de las políticas de población cuando es justamente su cuerpo el que está en juego en ambos casos.

Las ideas de superpoblación fueron en aumento luego de la Segunda Guerra mundial relacionándolas directamente con la pobreza y la imposibilidad de alcanzar el desarrollo. De esta manera, y para controlar esta “superpoblación” diversos países, con Estados Unidos a la cabeza y organismos internacionales, fomentaron políticas de regulación de la natalidad en países de América Latina. Argentina junto a la Iglesia Católica continuó sosteniendo políticas pronatalistas pero sólo en el terreno de lo discursivo, dado que no se efectuaron políticas claras en pos de lograr éste objetivo.

Vale remarcar que en nuestro país desde el año 1974 al 1977 se organizó el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional en donde se planteó:

(...) “la necesidad de aumentar la población, ya fuera a través de un incremento de la tasa de fecundidad, la disminución de la mortalidad o el fomento a las inmigraciones, e incluyó un informe diagnóstico de la situación demográfica del país. El plan disponía la implementación de programas sanitarios, educativos y nutricionales para disminuir la mortalidad, fomentar y orientar a la inmigración, contener la emigración, repatriar a científicos y técnicos, y corregir el desequilibrio regional, promoviendo migraciones hacia las zonas más deshabitadas.” (Felitti, K. A. 2004, p. 14)

Sin embargo, en el año 1974 Argentina adoptó una política represiva mediante el Decreto Presidencial N° 659 firmado por Juan Domingo Perón y López Rega que ocupaba el cargo de Ministro de Bienestar Social, el cual dispone:

(...) “controlar, mediante el expendio obligatorio de receta médica (por triplicado), la comercialización de anticonceptivos y prohibir el desarrollo de actividades relacionadas con el control de la natalidad. Además, se impidió la prestación de servicios de planificación familiar en los hospitales públicos, con la consecuencia de que sólo los sectores de la población con acceso a la medicina privada contaron con atención especializada en materia de anticoncepción, mientras las clases trabajadoras y los sectores populares quedaron prácticamente desprotegidos.” (D’atri, A. 2011, p. 4)

Este decreto recomendaba realizar estudios sobre el control de la natalidad y realizar campañas de educación sanitaria que prioricen los riesgos de la utilización de métodos y prácticas anticonceptivas. Este decreto que estuvo en concordancia con las ideas propugnadas de “poblar” el territorio argentino, a su vez, también fue sostenido durante la dictadura militar de 1976.

Previamente, en el mes de marzo del año 1974 mediante el Decreto N° 980 se creó la Comisión Nacional de Política Demográfica (CONAPODE), la cual tenía como objetivos “proyectar una política nacional de población e intensificar el crecimiento cuantitativo y

cualitativo de la población argentina y su más adecuada distribución regional.” (Felitti, *id*) Se proponía lograr metas demográficas y asesorar al Poder Ejecutivo y Legislativo en relación a éstas temáticas.

Si bien no se logró diagramar un plan súbitamente, para el año 1977 la Junta Militar promulgó el Decreto N° 3.938, “Objetivos y Políticas Nacionales de Población”, mediante el cual la CONAPODE entró en funcionamiento legislando y asesorando sobre políticas de población a nivel nacional. Se proponía otorgar incentivos para la protección de la familia, los cuales nunca fueron otorgados, y eliminar aquellas actividades que tengan el fin de controlar la natalidad, las cuales sí fueron cumplidas considerablemente a raíz de la cercanía existente entre la Iglesia y la Junta Militar.

No sólo la legislación, sino complejos mecanismos discursivos y dispositivos de poder, fueron puestos en funcionamiento para legitimar una única imagen de mujer asociada al rol maternal.

En el año 1979, la Convención sobre la Eliminación de todo tipo de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), en su Artículo 12 reconoce en forma expresa la existencia de relaciones de dominación que afectan las condiciones en que las mujeres realizan sus decisiones reproductivas. A pesar de los acuerdos internacionales, realizados en las Conferencias Internacionales, seguían produciéndose, sobre todo en los países del Tercer Mundo, violaciones a los derechos de planificación familiar, como se los nombraba en ese momento. Este problema dio origen a que, junto con la efervescencia del movimiento de mujeres, empezara a gestarse en estos países un movimiento por los derechos reproductivos; en este caso derechos reproductivos significaban principalmente, tener control sobre los métodos anticonceptivos para que estos no fueran aplicados coercitivamente a las mujeres.

A partir del regreso de la democracia, comienza a darse relevancia a las temáticas relacionadas con la salud sexual y (no) reproductiva, es en este momento cuando se instalan los derechos, la democracia y la ciudadanía. Si bien existió un clima favorable para dar lugar a políticas de igualdad hacia las mujeres incorporando temáticas de salud sexual y (no) reproductiva, se trató de un proceso complejo y paulatino.

Un número importante de mujeres acompañó al gobierno constitucional con la tarea de democratizar las instituciones, en los partidos, sindicatos, empresas privadas, universidades, parlamentos o en alguno de los tres poderes del estado, ellas apostaron que con su ingreso se garantizara la conquista de gran parte de sus reclamos específicos. Buena parte de sus reivindicaciones fueron recibidos por el grueso de la dirigencia masculina, excepto uno que quedó inmediatamente fuera: el derecho al aborto voluntario.

El año 1984 significó la apertura de un sinnúmero de agrupaciones feministas, en este sentido se podría pensar que un derecho inalienable debería recibir toda la atención que se merece, no obstante, no fue así. En estos años, principales referentes del feminismo delimitaron su ámbito de acción y de diálogo básicamente con dos interlocutores: el Estado en cuanto reclamo de derechos políticos y civiles y por otro lado la búsqueda de reconocimiento de la sociedad en general y de las mujeres en particular. *“Frente a estos perfiles fue previsible el posicionamiento de diferentes agrupaciones feministas con el objetivo de determinar cuál sería el plazo oportuno para plantear sus peticiones relacionadas con las sexualidades. Muchas de ellas consideraban desacertado reclamar por cuestiones que parecía impugnables y descontextualizadas ante los problemas heredados de la sangrienta dictadura cívico-militar.”* (Bellucci, 2014, p. 266)

Las sexualidades con sus amplios pliegues quedaron sin ser presentadas en sociedad, convocar al aborto y a la decisión de no parir resultaba un discurso inviable. Durante estos primeros años se mantuvo prácticamente como un tema tabú, carente de todo debate abierto tanto de las organizaciones feministas como de las instituciones públicas.

Es en el año 1993 que se deroga el Decreto N° 3.938/77 expuesto por la Dictadura Militar y se adopta la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El estreno de esta nueva década trajo consigo cambios tales como el notorio rol activo y poder de la Iglesia Católica al intentar introducir la “Cláusula Barra” (inspirada en el Ministro de Justicia Rodolfo Barra) en la modificación de la Constitución Nacional, la cual defendía la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. De esta manera, se intentó poner fin al debate acerca de la legalización del aborto y de la eutanasia.

En la Reforma Constitucional de 1994 se incorporaron los tratados internacionales concernientes a derechos humanos (Art. 75 Inc. 22 y 23) lo cual cimentó una base importante sobre la cual encarar la conquista de nuevos derechos.

Aunque el tema ya había estado instalándose en el movimiento de mujeres y feministas a partir de mediados de los años ochenta, el término derechos reproductivos comienza a adquirir peso y visibilidad cuando logra ser instalado en las Conferencias Internacionales, principalmente las desarrolladas durante la década del noventa. En este sentido las conferencias de El Cairo y Beijing, operan como punto de inflexión que marcarán un antes y un después.

Es importante recordar aquí que el término derechos reproductivos no es un concepto impuesto por los organismos internacionales, sino que tiene que ver con el movimiento de mujeres y feministas. Como se desarrolló previamente, el movimiento de mujeres por los derechos reproductivos se hace en la lucha concreta de las mujeres para lograr autonomía a

partir del control de su cuerpo y el ejercicio de una sexualidad libre del mandato de la maternidad y heterosexualidad obligatorias. Fueron las mujeres organizadas las que presionaron por la incorporación de estos temas en el ámbito internacional a partir de la movilización, la presión y el lobby en las Conferencias Internacionales y en las reuniones preparatorias. Fue en estas dos conferencias, El Cairo y Beijing, donde los conceptos de salud y derechos reproductivos se incorporan explícitamente en las Plataformas de Acción. La no inclusión del aborto en la definición de salud reproductiva constituye un indicio de los límites de los consensos posibles en los escenarios internacionales.

El panorama se presentaba complejo y contradictorio: las mujeres adquieren protagonismo, pero, la cuestión de la sexualidad y lo que comenzaba a llamarse derechos reproductivos hallaba un terreno previamente marcado por la tradición pro-natalista del Estado argentino, a lo que hay que sumar el peso político y social de la cúpula de la iglesia católica local, de tradición notablemente conservadora.

En el año 1995 se trata en la Cámara de Diputados un proyecto en donde se proponía la creación del Programa Nacional de Procreación Responsable que incluía la provisión de servicios gratuitos en los hospitales públicos. El principal opositor de la ley era el entonces presidente Carlos Menem (embajador premiado por la Santa Sede) quien instituyó el 25 de Marzo como el “Día del Niño por Nacer”, acción impulsada por el Vaticano en contra del aborto. A pesar de haber caducado en 1997 fue útil para instalar debates que lograron la aprobación de legislación sobre salud (no) reproductiva y sexual en diversas provincias argentinas.

Cuando se trata de incorporar un tema a la agenda pública y mucho más a la institucional, es necesario incorporarlo dentro de un discurso plausible para la sociedad. En los años ochenta y noventa este discurso más general era el que propiciaba Naciones Unidas a partir de las Conferencias Internacionales de El Cairo y Beijing, y en el plano nacional el de la ciudadanía, los derechos y la democracia. Y este punto de acuerdo o consenso estuvo dado por el acento puesto en la reproducción y la exclusión de la discusión de cualquier forma de ejercicio de la sexualidad que excediera la normativa heterosexual obligatoria y el tema del aborto, fue el tema que sin dudas generaría mayores conflictos.

Martha Rosenberg afirma que la denominación “Derechos Reproductivos” es producto de la convergencia de dos grandes puntos de tensión. La génesis de la idea de derechos reproductivos se halla, por un lado, en la lucha feminista por el aborto llevada a cabo en los países centrales en las décadas de los sesenta y setenta, asociadas con el control del propio cuerpo, de la fertilidad, de la capacidad reproductiva de las mujeres; es decir, con las luchas

por el aborto libre y gratuito en Inglaterra, Francia; Italia y EEUU. Pero, por otro lado, se vincula con las resistencias a las políticas de población coercitivas impuestas a las mujeres de los países del tercer mundo e incluso a las minorías de los países del norte, como las mujeres negras, por ejemplo. (Brown, 2007)

Para dar cabida a estos dos puntos disímiles pero convergentes (la demanda por aborto legal y la demanda por el control de los métodos anticonceptivos en los países periféricos) es que nace el término “Derechos Reproductivos”, que luego se logra introducir en las resoluciones de los organismos internacionales y de este modo, se legitima y le da fuerza al movimiento de mujeres y feministas para formular reivindicaciones e impulsar acciones en este sentido en los diferentes países. Luego de las disputas internas en los feminismos provenientes de las críticas de lesbianas, travestis y transexuales, y para visibilizar también otras sexualidades no heterosexuales y no reproductivas, se agrega el término sexuales.

El aborto, encubierto bajo la denominación “derechos reproductivos” al igual que el ejercicio de la sexualidad en formas que excedan la norma heterosexual-reproductiva, queda fuera de los consensos alcanzados en esos ámbitos. En el caso argentino la demanda por derechos sexuales y reproductivos devino en la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del año 2002. Esta conquista tanto en el plano de lo legal como en el de las políticas públicas significa haber podido hacer ingresar en el orden del derecho, demandas y necesidades relegadas e invisibilizadas por largo tiempo, tales como los derechos (no) reproductivos que, por todo lo dicho anteriormente, son bisagra entre lo público y lo privado y que ponen en evidencia el carácter sexuado de lxs sujetxs, al tiempo que tensan la noción clásica de ciudadanía cuya igualdad se edificaba sobre la base de una neutralidad y una universalidad de un modelo de sujeto que se representa como abstracto pero que, bajo la lente feminista es un varón, adulto, blanco y heterosexual.

Haciendo propias las palabras de Brown (2007, p.186), *“aun cuando el derecho quede circunscrito al ámbito de la salud y el énfasis esté puesto en la reproducción, son derechos relativos a las mujeres que comienzan a perfilarse tímidamente como sujetas dignas de ser titulares de derechos ciudadanos”*

Otra cuestión que es necesario recuperar: que una demanda de sectores subalternos se incorpore en términos legales, tiene una serie de implicaciones que trascienden lo legal, impactando en lo político y subjetivo. En términos políticos implica que esa demanda ha podido ingresar en el debate público-político y también en el institucional. Que un asunto sea discutido públicamente implica que ha logrado adquirir el estatuto de un tema relevante y se ha transformado en una cuestión de interés general trascendiendo el estigma del particularismo,

la intimidad y privacidad a la que suelen asociarse los temas vinculados con la reproducción, la anticoncepción, el aborto y las sexualidades.

Por otro lado, cabe destacar también que, el desplazamiento desde la noción de “derechos (no) reproductivos y sexuales” concebidos como derechos civiles, hacia la “salud reproductiva” pone en riesgo uno de los desafíos de la demanda que es politizar y discutir en términos públicos y políticos en asuntos relativos a los cuerpos, las sexualidades y la reproducción. La institucionalización de los derechos (no) reproductivos y sexuales en términos de salud reproductiva despolitiza y medicaliza el reclamo, en el sentido que éste deviene nuevamente algo que se dirime en el ámbito privado de un consultorio bajo el saber experto de lxs profesionales de la salud.

Los conceptos, así como las políticas tienen una trayectoria y son consecuencia de un determinado contexto y los resultados son siempre paradójicos, ambivalentes, ambiguos. Es decir, si bien la noción de salud reproductiva es problemática por lo antes explicado, supone un mínimo exigible al Estado en términos de derechos históricamente negados a las mujeres.

Por esta razón, es relevante seguir la trayectoria de los conceptos y las luchas por su reivindicación, así como ir siguiendo la institucionalización de esas demandas a través de las conquistas logradas. La construcción de esa genealogía permite señalar cuáles son los obstáculos y los límites, pero también las posibilidades y potencialidades e imaginar términos y demandas más acordes al tiempo presente. En síntesis, los derechos de los grupos subalternos siempre son frutos de una conquista y deben ser sostenidos constantemente, nadie los ha garantizado para siempre.

Capítulo III

Aborto voluntario, un derecho clave para la ciudadanía plena.

Los derechos sexuales y (no) reproductivos de la mujer en Argentina se inscriben en este escenario como una de las esferas principales de facultades que constituye aún un desafío para la ciudadanía. Este apartado intentará mostrar la naturaleza de estos derechos y su status jurídico de derechos personalísimos, que atribuyen autonomía a la mujer, inscriptos en el reconocimiento de los Derechos Humanos plasmados en nuestra constitución.

Este enfoque, siguiendo a Levín (2010), incorpora los supuestos que ofrece el derecho al registro de las libertades individuales, como derechos subjetivos y les otorga “poder individual” a aquellas decisiones que se ubican en ese plano. En este sentido se amplía la mirada sobre el problema en tanto logra superar la visión tradicional, que prevalece en la mayoría de los países de Latinoamérica, que sitúa los derechos sexuales y (no) reproductivos en el campo de la salud concibiéndolos jurídicamente como derechos sociales.

La sexualidad y la (no) reproducción hablan de la libertad del cuerpo y, por lo tanto, pertenecen al ámbito soberano de las personas que corresponde sean regulados desde la esfera de los llamados derechos personalísimos. El registro jurídico de las libertades, que preservan estos derechos personalísimos, implica al poder público deberes de “no hacer”. Los derechos sociales, en cambio, preservan el acceso a beneficios que presuponen del Estado el “hacer”, cumplir obligaciones y comprometerse con acciones que permitan su ejercicio.

Interesa mostrar aquí cómo la decisión sobre la naturaleza de estos derechos y su regulación jurídica produce efectos diferentes en la ciudadanía, ya sea acompañando su desarrollo, obstaculizando o interrumpiendo el proceso de construcción.

Desde la teoría de los derechos humanos, que sustenta la génesis y promoción de los derechos sexuales y (no) reproductivos en el marco de los derechos de la mujer, podemos formular ciertas críticas de la normativa internacional que, por ser la cuna de esos derechos, sin duda condicionan su destino. En primer lugar, la naturaleza jurídica adjudicada a los derechos sexuales y (no) reproductivos como derechos humanos de salud le resta entidad a la libertad que es inherente a la sexualidad y la (no) reproducción como esferas de derechos de competencia individual.

Esta decisión normativa permite controlar y limitar la libertad de la mujer como sujeta de derechos de ciudadanía en la comunidad política, para preservar y cuidar su identidad maternal, doméstica, productora y reproductora de servicios para la familia. Así, la normativa internacional se preocupa por enfatizar el discurso de las libertades individuales de los sujetos como fundamento de estos derechos, pero sus disposiciones regulan jurídicamente la

sexualidad y la (no) reproducción como poderes del Estado para garantizar el ejercicio de la salud sexual y la salud reproductiva. Los mecanismos de poder y de influencia utilizados para la obtención de un consenso universal parecen justificar la naturaleza normativa asignada y el procedimiento utilizado, sin embargo, las contradicciones jurídicas producidas como resultado de esa desnaturalización no logran proteger ni siquiera el bien jurídico desnaturalizado, que efectivamente se propone tutelar el ordenamiento internacional vigente, que es la salud de la mujer desde una visión amplia. (Levín, 2010)

“En esa contradicción se pone en evidencia la ausencia de justicia política y de justicia social que se traduce en dos resultados en términos de ciudadanía. Por un lado, se reafirma la constante histórica que el cuerpo de la mujer no le pertenece a su persona, sino que es heterónomo y, por otro lado, que ser mujer constituye esencialmente un estado de maternidad antes que de ciudadanía.” (Levín, 2010, p. 81)

La coacción para reproducir, basada en la negación de libertades es, además de una violación a los derechos fundamentales de toda persona, una negación de desarrollo a escala mundial. La interpelación que se le hace a la democracia es la ausencia del reconocimiento legítimo de identidad independiente de la mujer, lo cual trae aparejada la constitución de individuos que no están totalmente dentro de las regulaciones sociales, jurídicas y políticas de la sociedad y algunos de sus comportamientos las colocan en situaciones de marginación y discriminación, como en el caso de abortos clandestinos.

La noción de derechos sexuales y la de los derechos (no) reproductivos, encuentra su fundamento en la libertad del cuerpo, son derechos que invocan la libertad de elección en la vida sexual. Se trata de otorgar la capacidad de disfrutar de una vida sexual placentera sin riesgos ni coacciones, con posibilidad de tomar decisiones, tener opciones y elegir preferencias. Exigen el respeto a la privacidad y a la integridad física y mental, a la dignidad personal, a la autodeterminación, al mismo tiempo que comprometen servicios educativos e informativos del Estado que tendrán que formar, informar, asesorar sobre la problemática.

Los derechos sexuales y (no) reproductivos poseen desde 1994 jerarquía constitucional, desde ese entonces, los avances legislativos y políticos siguen produciéndose, al afianzarse los derechos en el campo de la salud, pero restableciendo cierto equilibrio en la medida en que, aunque sean tratados como derechos sociales de salud sin respetar la libertad, la mujer ha logrado tener presencia como sujeta de derechos.

Los derechos individuales son el referente para discutir la razón de ser de los derechos sexuales y los derechos (no) reproductivos y a la vez ordenarlos jurídicamente. Los derechos personalísimos se preocupan por abrir un camino capaz de garantizar la libre y necesaria

expansión individual. Se trata de derechos que nacen con el/la sujetx, son por lo tanto inherentes a la persona, inseparable de ella. Contemplan aquellos aspectos constitutivos de su individualidad y por ello definen al mismo tiempo su autonomía, se ocupan del hombre y de la mujer y de aquellas bases que hacen a su propia naturaleza: la vida y la libertad.

Desde la esfera de la libertad y de la autonomía se funda tanto la sexualidad como la reproducción y el cuerpo es el objeto de protección legal en tanto asunto que hace a la libertad de las mujeres, la cual es directa o indirectamente la libertad del cuerpo, esta libertad es la que es amenazada por el orden familiar, en el cual su cuerpo es utilizado como medio para fines que no son los suyos. La libertad en este caso es una libertad positiva ya que otorga la posibilidad de autodeterminarse, de expresar la propia voluntad. Pero es positiva en la medida en que se le reconozca también la libertad negativa que es la posibilidad de obrar o no obrar sin ser obligada a ello o sin que se lo impidan otrxs sujetxs.

Sin embargo, aún hoy, cuesta mucho ver y dar a la mujer una existencia propia, separada de lxs otrxs, acordando con Levín (2010), la vía para transitar una existencia individual por derecho propio es ampliar las inclusiones de autonomía desde la esfera de la ciudadanía. Y la libertad femenina es la libertad del cuerpo, la mujer no puede subordinar la autonomía a otros valores, ni siquiera al de la salud, porque cada vez que se entrega partes de su cuerpo, partes de su libertad. En todo caso, sí podemos aspirar a una articulación equilibrada de valores: salud y libertad y los derechos personalísimos desafían esa labor.

El reconocimiento de la sexualidad y la reproducción como derechos humanos de ciudadanía en el plano internacional, ha tenido fuerte impacto social, político y cultural en Argentina y en toda América Latina. Fue el movimiento feminista quien impulsó la visión de la sexualidad y la (no)reproducción como derechos humanos de ciudadanía ya que resolver las atribuciones jurídicas y políticas de éstos asuntos como esferas de ciudadanía exige revisar el orden social, político y cultural reinante en el cual se desenvuelven las relaciones sociales de género. El orden patriarcal determinó la identidad y la forma de inserción de la mujer en el mundo en función de su condición biológica natural de procrear. El desafío de las últimas décadas, desde el campo de la ciudadanía, fue profundizar la deconstrucción de este orden que ya venía siendo desestabilizado, por la lucha persistente del movimiento feminista, para acelerar la instauración de nuevos parámetros de organización de las relaciones sociales.

Capítulo IV

¡Que sea ley! El camino del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta ingresar al Congreso.

El debate por el derecho al aborto en Argentina puede enmarcarse en un conjunto más amplio de discusiones referidas a los derechos sexuales y (no) reproductivos. Si bien el país ha logrado avanzar sobre las legislaciones que garanticen estos derechos (Ley De Educación Sexual Integral, el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Guía de Abortos no Punibles, entre otras) el derecho al aborto voluntario sigue siendo tipificado como delito por el Código Penal, en la sección “delitos contra las personas”. Para que un aborto sea legal en Argentina la exigencia es que exista fatalidad de por medio: una violación, un embarazo inviable, riesgo de salud o de muerte del cuerpo gestante.

Desde el regreso de la democracia hasta la actualidad, se han presentado en ambas cámaras legislativas, más de sesenta proyectos de ley referidos al aborto. La mayoría de los mismos se centra en modificaciones a los abortos no punibles y en una menor medida a la despenalización total, pero también hay proyectos orientados a reforzar las restricciones vigentes. Siguiendo una tipología presentada por Zicavo, Astorino y Saporosi (2015) en una investigación de la UBA, se podría clasificar a los diferentes proyectos como: *progresistas ampliatorios*, *progresistas moderados* y *restrictivos*. En líneas generales, los que se denominan restrictivos plantean modificar el Artículo 86 del Código Penal, dejando sin efecto las actuales causales de no punibilidad. Es decir, realizan una lectura aún más restrictiva que la actual, esgrimiendo (entre otras cuestiones) la inconstitucionalidad del derecho al aborto.

Por su parte, los progresistas moderados sugieren modificaciones que enmienden el actual Código Penal para ampliar las causales de no punibilidad, por ejemplo, incluyendo los casos de anencefalia fetal y los embarazos producidos por delitos contra la integridad sexual (sin distinguir respecto a si la mujer abusada goza de sus facultades mentales o no). Por último, los progresistas ampliatorios apuntan a la derogación de los artículos del Código Penal que tipifican al aborto como delito y contemplan la libertad de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en tanto sujetas autónomas, planteando la despenalización del aborto hasta las 12/14 semanas de gestación.

Los derechos humanos y la salud, son significantes que aparecen reiteradamente en los distintos proyectos y dan cuenta de la disputa por los significados en los discursos sociales circulantes respecto al aborto y a los derechos sexuales y (no) reproductivos. Para el caso de los proyectos progresistas ampliatorios, la apelación a los derechos humanos es recurrente,

tanto en las alusiones a convenciones y tratados internacionales, como en los fundamentos del texto.

Estos proyectos conciben el derecho al aborto como un derecho que integra un conjunto más amplio, el de los derechos (no) reproductivos y afirman que estos derechos deben ser reconocidos como DD. HH., basándose en el principio de integralidad, interdependencia e indivisibilidad de los mismos.

El derecho a decidir no solo incumbe a la interrupción del embarazo, sino que incluye también el derecho a decidir la maternidad. Es reconocer a las mujeres como sujetos sociales, como ciudadanas. Tal como se lee en el Proyecto 2249 D 2014: “Argentina como país signatario de pactos y convenciones de derechos humanos y sus protocolos facultativos, que forman el corpus jurídico de este derecho, está obligada a garantizar a las mujeres los siguientes derechos: a la vida, al máximo nivel posible de salud física y mental, a la igualdad y no discriminación, a la intimidad y a la autonomía reproductiva, a la libertad, a verse libre de tratos crueles inhumanos y degradantes, a la libertad de conciencia y religión, entre otros. La prohibición del aborto y la falta de acceso a procedimientos seguros, de calidad y gratuitos es una violación a estos derechos”. (Zicavo, Astorino y Saporosi, 2015)

Es preciso detenerse en el modo en que los proyectos de ley argumentan la necesidad de modificar la legislación existente. Aludir al aborto como derecho humano, además de contemplarlo dentro del derecho a la salud, es también incluir un derecho exclusivo de las mujeres dentro del universal de humanidad que tanto tiempo les fue negado (tanto en las leyes como en el lenguaje).

Desde que se conformó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, el proyecto de ley que despenaliza el aborto, afirma que “Toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional” [...] “Las organizaciones de este gran arco de alianzas consideramos que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos y deben ser reconocidos como derechos básicos de todas las personas. Para eso, es necesario garantizar el acceso universal a los servicios públicos que los sostienen. El lema –así como el trabajo de años– es integral: ‘Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para no Abortar, Aborto Legal para no Morir’. Esto implica la exigencia hacia el Estado de realizar modificaciones en los sistemas de Educación, Salud y Justicia, y también, por supuesto, propiciar en la sociedad profundos cambios culturales.// Nos basamos en la integralidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos” (Proyecto 2249 D 2014)

Este proyecto de ley fue presentado por octava vez, siempre con la firma de varixs legisladores, sin lograr que el debate se diera en el recinto (a pesar de que lxs firmantes pertenecen a distintas fuerzas políticas).

En el año 2018 ingresó por primera vez al Congreso Nacional. Se trata de un reclamo de larga data, o como dice uno de los slogans de la Campaña Nacional: “una deuda de la democracia”. La reticencia a tratar el tema a nivel parlamentario da cuenta tanto de los procesos políticos específicos, como de la permeabilidad de los discursos sociales circulantes respecto al aborto y a los derechos sexuales y (no) reproductivos en el país.

Fue en los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM), eventos de gran magnitud no sólo por la presencia numérica sino básicamente por la heterogeneidad de su composición, que se manifestó el aborto voluntario como un derecho a ganar.

En el año 1988, en el III ENM de Mendoza, fuera de la programación estipulada, se desarrollaron talleres “alternativos” como los de aborto, heterosexualidad y lesbianismo. En los sucesivos ENM, la demanda del aborto obtuvo un mayor consenso y su tratamiento pudo transversalizar la discusión en los más diversos talleres, pero aún sin el empuje para arrojarse a conquistar un espacio propio.

En 1995, durante el X ENM realizado en Jujuy, se constituyeron talleres de aborto legal bajo el título “anticoncepción y aborto”. Para el año 2003, en el ENM realizado en la ciudad de Rosario una de las novedades fue la Asamblea por el Derecho al Aborto, organizada por la Comisión por el Derecho al Aborto, la cual fue masiva. Allí se debatían las “estrategias para un aborto legal y seguro” con la consigna de impulsar medidas de acción para avanzar.

En Rosario, ese mismo año se organizó por primera vez una campaña por la despenalización, con entrega de cintas verdes, conferencia de prensa y firma de petitorio, todo ello representó un avance en la visibilización de la temática. En el XIX ENM en Mendoza, se resolvió consolidar las propuestas del taller de estrategias para el acceso al aborto legal, seguro y gratuito; a partir de ese momento se hizo visible una nueva meta: apostar en un futuro próximo a la constitución de una campaña a nivel nacional. (Bellucci, 2010)

En el año 2005, se conformó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto como espacio articulador. En su primer encuentro fueron setenta organizaciones de todo el país. Trece años después son más de quinientas organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos, entre otras. Desde este año iniciático, la Campaña fue creciendo de manera autogestiva, horizontal, plural y democrática. En 2007 se presentó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por primera vez en el Congreso como Campaña, después se volvió a presentar siete veces más hasta que tomó estado parlamentario. Entre esa

presentación inicial y la última la Campaña creció de manera cuantitativa y cualitativa en su propia organización.

“En 2018, las 72 firmas de diputadxs de distintos bloques marcaron un record de apoyo. No se consiguieron de un día para otro: fue un trabajo cotidiano de infiltración feminista al interior del poder legislativo. Además del grupo de Articulación, que funciona como mesa de enlace hacia afuera, desde 2012 también existe dentro de la Campaña la comisión de Cabildeo, que trabajó en la incidencia de la Cámara Baja: recorrían los despachos con el proyecto, convocaban a reuniones en las salas del Congreso y ahí sumaban adhesiones. Con cada presentación y fecha de la agenda de efemérides feministas hacían conferencias de prensa en algún salón de audiencias del anexo de Diputadxs.” (Alcaraz, 2018, p. 50)

Cuando Dora Coledesky armó junto con otras compañeras la Comisión por el Derecho al Aborto (Codeab) en 1988, las integrantes apenas llegaban a ser una decena. Treinta años después, miles de pañuelos verdes de la Campaña Nacional fueron para el primer “pañuelazo” frente al Congreso de la Nación que fue la antesala del ciclo legislativo y la previa a la séptima presentación del proyecto de ley.

La potencia que tomó el feminismo popular en el 2018, respondió a un giro inesperado. Por un momento los medios de comunicación se volvieron aliados de la difusión de las demandas, denuncias y deseos de ese sector político. Desde la televisión se agitó a la efervescencia que ocurría en asambleas, espacios de trabajo, centros de estudiantes, sindicatos, universidades y barrios. Se dieron una serie de hitos que aceleraron procesos de discusión y abrieron nuevas conversaciones públicas, sobre todo en torno al aborto y a la violencia machista, dentro de los estudios de televisión.

Y ese proceso de “sacar los abortos del clóset” sería acompañado también, de algún modo y sólo inicialmente, por el gobierno actual de la Alianza Cambiemos. El presidente Mauricio Macri, en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, nombró la palabra históricamente omitida y negada, dándole “luz verde” al debate sobre el aborto en el Congreso.

La aparición de una demanda histórica del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans en boca de un mandatario varón, de un gobierno conservador, neoliberal y responsable de una democracia de baja intensidad produjo contradicciones en los grupos que luchan desde hace décadas por obtener este derecho, porque al mismo tiempo que los diarios le daban el crédito de la apertura del debate al presidente, fue contra este mismo mandatario que, previamente, habían levantado sus voces las mujeres, lesbianas, travestis y trans, principalmente por sus políticas económicas de ajustes que impactan de manera negativa en

mujeres e identidades feminizadas, quienes sufren principalmente la precariedad laboral y violencia económica; y por el desfinanciamiento de las políticas de género en su gestión.

Este acontecimiento debe leerse en una serie que va desde la histórica pelea por el derecho a decidir sobre los cuerpos que se remontan en la democracia, a las primeras organizaciones para conseguir la ley, pasando por los Encuentros Nacionales de Mujeres, los trece años de Campaña, un conjunto de leyes que ampliaron derechos de las mayorías, las identidades feminizadas y los colectivos de la diversidad, el punto de inflexión que significó Ni Una Menos en 2015 y los paros internacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans. Como afirma Alcaraz (2018), cada una de esas acciones disputó determinados sentidos en una narrativa en donde no eran incluidas las demandas feministas y esas disputas de sentidos ganadas por los feminismos, lograron que el aborto saliera del clóset de una vez por todas.

En ese clima, fue presentado por la Campaña Nacional, por séptima vez, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo ante la Cámara de Diputadxs. El texto tuvo un record de firmas de acompañamiento de todo el arco político, con un total de 71 avales. Y, en una estrategia que expresó la transversalidad construida por el feminismo por fuera de la política tradicional, la presentación fue encabezada por cuatro cofirmantes.

Esta presentación planteada por cuatro coautoras, representantes de distintas organizaciones fue efecto de todas las movilizaciones y de cómo fue construyendo el feminismo de manera transversal dentro de los partidos políticos, construcción que se expresa en los Encuentros Nacionales de Mujeres.

El proyecto de ley de la Campaña Nacional que se presentó en 2018, en síntesis, planteó que toda mujer y persona gestante que hubiera solicitado un aborto y dado su consentimiento por escrito tenía derecho a que se cumpliera su pedido en un plazo máximo de cinco días, sin que mediara ninguna autorización judicial previa. En el caso de embarazos adolescentes, la propuesta de la ley entendía que entre los trece y dieciséis años, la persona “cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar debido consentimiento”. En menores de trece años, decía, en cambio, “se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal”. El texto de la norma planteaba que tanto el sector público de salud, como las obras sociales y las entidades de medicina prepaga, deberían incorporar como prestaciones médicas básicas obligatorias a sus afiliadas la cobertura integral de la interrupción legal de embarazo, y que las autoridades médicas de cada establecimiento, de acuerdo con el Artículo 40 de la Ley Nro. 17.132, serían los encargados de garantizarlo. Los alcances de este proyecto tenían en cuenta, además, las situaciones en las cuales la interrupción del embarazo ya es legal en Argentina: “Si el embarazo fuera producto

de una violación con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente; si estuviera en riesgo la vida o la salud psíquica, física o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano y si existieran malformaciones fetales graves”. Y algo clave es que el proyecto proponía derogar los artículos del Código Penal de la Nación que penalizan a la mujer y al personal sanitario que realice abortos bajo consentimiento. (Alcaraz, 2018)

Esta propuesta de ley de la Campaña fue girada a cuatro comisiones encargadas de debatir en plenario. Se presentaron también otras nueve iniciativas de distintos legisladores sobre el mismo tema, algunos proyectos fueron regresivos, otros propusieron la fabricación pública de misoprostol.

El debate en la Cámara Baja fue un proceso trascendental de cara al pueblo y la historia de nuestro país ya que se trató de un hecho político, pedagógico, abierto y público que fortaleció la democracia y logró construir un amplio consenso social alrededor de la temática. Fueron 15 audiencias y 738 expositores/as en más de 130 horas de debate, con más de un millón de personas expectantes.

En junio de 2018, fue el último plenario de comisiones en que la Cámara Baja firmó el dictamen, es decir, el texto que se trataría en el recinto con determinadas modificaciones. El dictamen incorporó varios cambios trabajados por un amplio grupo de asesores para lograr acuerdos de mayoría. Más allá de las modificaciones que provocaron algunos desconciertos y enojos, con 64 firmas a favor de esa propuesta contra 57 firmas de rechazo de plano, la ley fue discutida por primera vez en una sesión legislativa con el pleno de la Cámara de Diputadxs reunido y los feminismos lograron abrir las puertas del Congreso.

Junio de 2018, fue histórico para la política argentina y para el feminismo en particular ya que se trató la ley de interrupción voluntaria del embarazo por primera vez en la Cámara de Diputadxs. Un total de 152 diputadxs se anotaron para ser oradorxs, tanto a favor como en contra, el resto esperó al momento de la votación para apretar la botonera y dar a conocer su opinión. Mientras tanto la ocupación callejera se desplegó de una manera hasta entonces desconocida para la política tradicional. No fue un episodio inusitado, fueron los años de organización feminista y popular que lograron este acontecimiento. La Campaña garantizó la seguridad con organizaciones de izquierda y populares. La plaza y las mujeres cambiaron las voluntades de muchos diputadxs. El lobby estuvo más allá de los pasillos de la Cámara, la potencia feminista y la vitalidad de la concentración fueron cruciales.

El Congreso de 1921, que votó el Código Penal y decidió sobre las trayectorias vitales de las mujeres y personas gestantes durante casi cien años, era un cuerpo legislativo de 158

varones. En 2018, cupo femenino mediante, de 257 diputadxs que se sentaron en una banca, 100 fueron mujeres. No todas estuvieron a favor del aborto, pero un grupo fundamental de ellas hizo mucho para conseguir la media sanción.

Como afirma Alcaraz (2018), abandonadas a su suerte, excluidas de la historia, omitidas en el relato, las mujeres, lesbianas, travestis y trans tramaron una forma de hacer política que desbordó las formas y contenidos de la política tradicional. La transversalidad con la que las diputadas, asesoras y el “cabildeo” de la Campaña encararon la tarea de organizar las exposiciones, trabajar sobre el dictamen y conseguir los votos fue una experiencia inédita. No correspondió a los cánones clásicos de la cultura partidaria y sólo puede entenderse esta construcción si se pone bajo el lente la construcción de los Paros Internacionales de Mujeres: el feminismo es orgánico al feminismo más allá de lo partidario.

Con 129 votos a favor y 125 en contra, se anunció la media sanción de la ley. Argentina estaba al borde de una ley pero faltaba el Senado de la Nación. Fue allí, donde la hostilidad se hizo sentir en cada plenario de comisión en los que, al igual que durante la primera etapa del proceso, expusieron personas expertas en la temática.

El camino hacia el recinto fue sinuoso y hostil desde un primer momento en el Senado, los 38 votos de rechazo que circularon se volvieron la cifra que clausuró un proceso parlamentario con un ejercicio pedagógico y de democracia inédito en la historia.

Reflexiones finales

Pasaron treinta y un años desde que Dora Coledesky, junto a otras compañeras, formó la Comisión por el Derecho al Aborto en el 1988; y catorce años desde que en 2005 quedó conformada la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Las dos sesiones dieron cuenta de una realidad irrefutable ya puesta en común con la sociedad. Por un lado, las consecuencias a las que se enfrentan las mujeres y personas gestantes de la Argentina ante su decisión de no continuar un embarazo y la posibilidad real de perder la vida en un aborto inseguro.

La lucha por el aborto voluntario logró uno de los procesos políticos, pedagógicos, transversales, públicos y plurales más interesantes de la vida democrática en nuestro país. Un proceso de construcción de consensos que dejó en evidencia que, al igual que el trabajo doméstico invisibilizado y no remunerado, que recae con mayor fuerza sobre las identidades feminizadas, el trabajo de las mujeres en la conquista de sus derechos nunca se termina y tampoco terminará con la sanción de una ley.

Una mujer que aborta se apropia de lo que le pasa o le pasó, es decir, de un embarazo involuntario, no deseado o incompatible con su vida. Abortar no es cuestión de artículos del Código, sino que es una acción que cambia profundamente todas las relaciones sociales, cambia la posición del sujetx, la manera en que se gestiona y regula esta sucesión de las generaciones, mediada por la heterosexualidad y su normalización mediante el refuerzo de los estereotipos de género. La práctica del aborto es una práctica contrahegemónica, contracultural, a pesar de que las mujeres que se lo practican no siempre tengan conciencia de que están resistiendo y desafiando la identidad maternal prescrita como la identidad esencial del género femenino.

En la demanda pública del aborto legal, en conjunción de voces y acciones, se transitó de una decisión individual de resistencia al orden establecido, hacia una lucha que nos constituyó como sujetas de derechos que pueden exigir justicia. El derecho al aborto seguro supone el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos (no) reproductivos como parte sustancial interdependiente e indivisible de los derechos humanos que merece el mismo grado de garantías del Estado para ejercerlo que los demás derechos humanos: civiles, políticos, culturales, económicos y sociales.

La clandestinidad del aborto lo ubica en el espacio privado regulado por el acceso diferencial de las mujeres a las riquezas económicas y culturales según su clase social: reproduce los privilegios de las clases altas y las privaciones de las bajas. Legalizarlo visibiliza para toda la sociedad que, aunque sus protagonistas sean las mujeres, es una responsabilidad común de

equidad de género y justicia social poner a su disposición la tecnología necesaria para la defensa de su vida y la libertad de sus decisiones. Por eso la legalización del aborto es una deuda de la democracia. (Rosenberg y Schvartzman, 2014)

Lo que propone y exige el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se ancla en este aspecto: la voluntariedad de la persona. En el modelo actual por causales, la autonomía de las mujeres está cercenada y el acceso a una práctica segura depende de la opinión de profesionales, lo que se transforma en una forma de tutela del cuerpo.

La ampliación de derechos, así como las personas capaces de gozar de ellos a lo largo del tiempo ha dependido de las transformaciones históricas que han sufrido los Estados tanto en su forma como en su contenido, así como las transformaciones de las acciones colectivas. Entonces las demandas exigibles al Estado, es decir, los derechos, provienen de los reclamos insistentes y repetidos de personas o grupos de personas. El derecho se ha convertido en el lenguaje universal tanto para formular demandas como para resistir y esta tendencia intrínseca de los derechos humanos a ampliar y expandir los derechos ha instalado la capacidad de incluir la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho ciudadano.

La cuestión en torno al aborto legal reside aún en la resistencia en la frontera entre espacio público y privado y en la dificultad que hallan los grupos subalternos para ser escuchados en el ámbito público.

El reclamo por este derecho pone sobre la mesa una evidente tensión entre autonomía privada y autonomía pública en relación con la ciudadanía de las mujeres. El Estado de Derecho garantiza a la mujer la salud sexual y la salud reproductiva. Sin embargo, no le otorga independencia, autonomía de la voluntad para tomar decisiones sobre su cuerpo. Pareciera entonces, dice Levín (2010), que para que la mujer pueda acceder a la ciudadanía plena (autónoma) en relación con los derechos sexuales y (no) reproductivos, la sociedad democrática debe completar el proceso de construcción de su autonomía.

Tal como están concebidos normativamente estos derechos para alcanzar la autonomía pública, se debe garantizar a la mujer la libertad del cuerpo para que su salud esté asegurada. Si no es libre, no puede tener opciones ni ejercer elecciones, frente a la situación de un embarazo no deseado la mujer está obligada a ser madre. Si es libre para decidir esa libertad asegura elecciones, frente a embarazos no está obligada a abortar ni tampoco a ser madre. Alcanzar la ciudadanía de la mujer requiere tanto renovar un compromiso ético con la democracia para lograr la autonomía pública como exigir políticas que se ajusten al estado de Derecho.

Nuestra profesión tiene una clara vinculación con la defensa de los Derechos Humanos y en esta tarea, la legislación vigente pasa a hacer el pilar sobre el cual fundamentamos nuestro accionar e intentamos ampliar los márgenes de ciudadanía. El Trabajo Social está fundado sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad y la igualdad; tal y como se contemplan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho

Esto se evidencia en el Código de Ética Profesional de la 2da. Circunscripción de la Provincia de Santa Fe en sus artículos:

“Art.6º: En el desempeño de su profesión el Trabajador Social debe respetar la dignidad del ser humano, que por su naturaleza tiene el derecho de su realización en justicia, solidaridad y libertad.

Art.7º: En el ejercicio de la profesión el Trabajador Social tiene el deber de respetar las posiciones filosóficas, políticas y religiosas de aquellos con quienes trabaja, teniendo en cuenta el principio de autodeterminación. Debe asimismo reconocer que todo ser humano posee un valor único, con independencia de su origen, edad, creencias, etnicidad, condición socioeconómica.

Art. 8º: Al Trabajador Social le corresponde tratar de promover la legislación social necesaria, de acuerdo con las necesidades del usuario, y de una mejor calidad de vida, reconociendo el derecho del mismo a participar.

Art. 9º: El Trabajador Social debe colaborar con los poderes públicos en la preservación de los derechos individuales y colectivos, dentro de los principios democráticos, participando en la construcción de una sociedad justa y solidaria.

Y en esta participación en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, es que en el ejercicio de la profesión, el cumplimiento de la legislación vigente respecto a los abortos no punibles, es esencial. Si bien como se ha desarrollado a lo largo de este trabajo, el protocolo de abortos no punibles y el acceso a las Interrupciones Legales del Embarazo, tiene claras limitaciones para plantear a las mujeres y cuerpos gestantes como ciudadanas plenas, es una herramienta fundamental para garantizar derechos.

Además de brindar información clara sobre los derechos que ya poseemos y garantizar su accesibilidad y cumplimiento, teniendo en cuenta que el trabajo social es una profesión con un claro perfil feminizado y que la mayoría de las veces, las que acceden a las instituciones, y son la población con la que trabajamos, también son mujeres; se hace necesario abrir el debate dentro de las instituciones en las que nos insertamos laboralmente, para poner en cuestión el derecho al aborto voluntario no sólo desde una premisa sanitaria.

Se trata de ir un poco más allá, que no sea únicamente garantizar una Interrupción Legal del Embarazo y evitar los posibles riesgos en la vida de cuerpos gestantes, sino que pueda ser pensado como una posibilidad de empoderamiento y autonomía de las mujeres.

Resulta necesario que lxs profesionales propongan otra mirada, que se abran espacios hacia adentro y hacia afuera de las instituciones donde se discutan los mandatos hetero-patriarcales, el rol asignado a las mujeres como madres y cuidadoras para dar batalla en la correlación de fuerzas que se da actualmente en la sociedad y por ende en las instituciones y llegar a prácticas más liberadoras, donde las mujeres sepan de sus derechos, dentro del cual tiene que estar necesariamente el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

A su vez, acordando con Rozas Pagaza (2015), para el caso del Trabajo Social, la investigación debe servir para problematizar cuestiones específicas del ejercicio profesional, en tanto ella tiene proximidad con las manifestaciones entendidas como “problemas sociales”. En este sentido la investigación nos convoca, desde el punto de vista ético a comprender y explicar la realidad, a descubrirla e interpretarla críticamente y esto sin dudas rompe con las lógicas de pensar y construir conocimientos a los fines solamente de competencia individual. Acordando con la autora, las investigaciones deben mostrar los mecanismos que obturan procesos de inclusión y desigualdades existentes, así como las capacidades que tiene lxs ciudadanxs para demandar, reivindicar y/o alterar las reglas de juego arbitrariamente establecidas.

Es necesario fortalecer líneas de investigación referidas a la intervención con las problemáticas sociales en el ámbito de la salud, salud mental, hábitat, niñez, adolescencia, familia, vejez, género, pobreza, estrategias de vida, ciudadanía, movimientos sociales. Pero fundamentalmente aportar estudios que nos permitan caracterizar, identificar y socializar cuales son las nuevas y viejas demandas que no han sido consideradas. La investigación debe estar vinculada a las experiencias organizativas de los sectores populares, cuánto de sus vínculos con los programas sociales han favorecido o no su revitalización política, la autonomía en el ejercicio de sus derechos y la ampliación de ciudadanía. (Rozas Pagaza, 2015)

Y en este sentido el Trabajo Social no puede permanecer aislado de los movimientos de mujeres, lesbianas, travestis y trans que, acorde a lo presentado en esta tesina, pugnan por el cumplimiento de derechos que ya poseemos y el reconocimiento de los derechos que todavía faltan. Porque, aún si se lograra la aplicación total de la legislación actual y del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, y toda mujer pudiese acceder a un aborto seguro, sería necesario continuar exigiendo la legalización y la legitimación del aborto voluntario ya que es crucial el reconocimiento de la voluntad de no maternar, que aún en la aplicación más

progresiva de la legislación actual, queda siempre sujeta a justificaciones y aprobaciones médicas. Hoy la decisión de una mujer de interrumpir un embarazo debe ser avalada por un otrx para ser válida y eso implica entender a las mujeres como ciudadanas de segunda, ponerlas en un lugar de incapacidad de decisión sobre las posibilidades.

El reconocimiento legal del aborto voluntario reclama no sólo que no se nos condene a los riesgos del aborto clandestino, sino el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho.

Como se fue dilucidando a lo largo de los capítulos anteriores, existe un basamento patriarcal y machista, donde el rol de la mujer como madre sigue siendo uno de los pilares sobre los que construimos la sociedad. El desandar esa idea genera aún muchísimo rechazo y que las mujeres nos corramos de los lugares que nos fueron asignados, empieza a minar espacios de poder. Desde el trabajo social se debe pensar cómo se pueden disputar estos espacios de poder en las instituciones donde desarrollamos la profesión. Es necesario para esto realizar una caracterización del Estado como espacio complejo y agrietable, que no es el único depositario de poder y constituye un espacio a disputar y desde el cual desarrollar política.

Pensar qué tipo de legalidad del aborto queremos construir, implica pensar el derecho a abortar desde una perspectiva feminista. Pensar el aborto como ejercicio de soberanía, esto no es sólo una consigna: para muchas mujeres la decisión de interrumpir un embarazo es una de las pocas decisiones autónomas que han tomado, la primera vez que no ponen los deseos de otrxs antes que los propios. Y no sólo pensando en la soberanía sobre el propio cuerpo, sino también, de cómo esa decisión sobre el cuerpo, implica reconocer el propio deseo, pensar, dimensionar y elegir sobre las posibilidades de proyectos de vida, sin negar la diversidad de vivencias y sentires que atraviesan la decisión de interrumpir un embarazo.

Ser protagonistas de nuestras propias vidas es un punto crucial para sostener procesos de empoderamiento y de poder dimensionarnos como sujetas políticas, con capacidad de incidencia, crítica y activismo sobre lo que se da dado por supuesto. Por tal motivo, no puede pensarse la lucha por la legalización del aborto voluntario por separado de un activismo más amplio por cambiarlo todo, contra toda forma de opresión y discriminación.

Abortar es decir que no y aparece una posibilidad: decir que no como derecho, decir que no como opción, rechazar lo que antes se había soportado, impugnar, o desobedecerlas dentro de lo posible, las reglas escritas por otrxs. No a una pareja violenta, no a un embarazo no deseado, no a un acto sexual, no a la precarización de nuestras vidas, no al desempleo, no a la brecha salarial, no a la violencia institucional. La lucha por el aborto legal es una lucha por la soberanía, es una disputa de los sentidos y de las leyes. Decir que no a la reproducción como esclavitud, decir que no es un profundo cuestionamiento al orden social.

La negación de este derecho es un acto de violencia sobre los cuerpos de las mujeres y varones trans. Los proyectos de vida, la sexualidad y la reproducción deben ejercerse desde la autonomía y desde la libertad. Una ley que despenalice y legalice el aborto voluntario implica avanzar hacia una ley que amplíe las posibilidades y los proyectos de vida: que permita decir que no a un embarazo para decir que sí a un listado infinito de deseos y formas de vida.

El año 2018 marcó un hito en esta lucha, en el plano social, cultural y legislativo, que obliga a revisar cómo se llega a que el pañuelo verde sea parte del paisaje urbano y parte de un discurso público. Esto no se dio de un día para otro y el recorrido tampoco fue lineal. La nitidez sobre la necesidad de abordar este tema desde la salud pública, los derechos humanos, la justicia social y la autonomía fue una construcción colectiva conquistada. Como afirma Alcaraz (2018), habrá una mujer atándose el pañuelo en el cuello hasta que el aborto sea ley en Argentina, y más adelante también, porque una norma escrita tampoco garantiza la concreción de un derecho y porque habrá que, sin duda, extender la conquista legislativa a toda la región de América Latina y el Caribe, lo cierto es que esta lucha nos pertenece y a esta lucha le decimos que sí.

Bibliografía

Aguado, Ana. (2005), Ciudadanía, mujeres y democracia. *Historia Constitucional*, (6), 11-27. Disponible en <http://hc.rediris.es/06/index.html>

Alcaraz, Florencia (2018), *¡Que sea ley!* Buenos Aires, Argentina, Marea

Bellucci, Mabel (2014), *Historia de una desobediencia*. Buenos Aires, Argentina, Capital Intelectual.

Brown, Josefina. (2006), *Ciudadanía de las mujeres en Argentina. Los derechos (no) reproductivos y sexuales como bisagra, lo público y lo privado puesto en cuestión* (maestría). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Barrancos, Dora. (2011), Género y ciudadanía en la Argentina, *Iberoamerican Nordic Journal of Latin and Caribbean Studies*, Estocolmo, vol. XLI, pp. 23-40

Brown, Josefina. (2016), *Mujeres y ciudadanía. Algunas perspectivas actuales sobre dilemas heredados*. Ponencia presentada en VIII Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres, III Congreso Iberoamericano de Estudios de Género. Universidad Nacional de Córdoba, Villa Giardino, Córdoba.

Burton, Julia (2013), *Aproximaciones al movimiento de mujeres y a feminismo en Argentina, 1970- post 2001*. X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Disponible en: <http://www.aacademica.org/000-038/398>

Ciriza, Alejandra (2006), Notas sobre ciudadanía sexual. El derecho al aborto y la ciudadanía de las mujeres en el debate argentino. *Revista Escenarios Alternativos*. Disponible en: <http://www.escenariosalternativos.org/default.asp?buscar=ciriza>

Ciriza, Alejandra (2007), *¿En qué sentido se dice ciudadanía de mujeres? Sobre las paradojas de la abstracción del cuerpo real y el derecho a decidir*. En publicación: Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía. Hoyos Vásquez, Guillermo. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/hoyos/19Ciriza.pdf>

D'atri, Andrea. (2011), *Derecho al aborto, derechos sexuales y reproductivos en Argentina Sexo, mentiras y... silencio*. Disponible en: <http://www.ips.org.ar/wp-content/uploads/2011/03/Sexo-mentiras-y...-silencio.pdf>

Di Marco, Graciela. (2010), Los movimientos de mujeres en la Argentina y la emergencia del pueblo feminista. *La aljaba*, 14, 51-67. Disponible en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-57042010000100003&lng=es&tlng=es.

Fabbri, Luciano. (2013), *Apuntes sobre feminismos y construcción de poder popular*, Rosario, Argentina, Puño y letra editorialismo de base.

Felitti, Karina. (2004), *Una política demográfica nacional: debates y repercusiones del simposio sobre política de población para la Argentina (1969)* en VIII Jornadas argentinas de estudios de población, Tandil, Argentina. Disponible en: <http://www.redaepa.org.ar/jornadas/viii/AEPA/B13/Felitti.pdf>

Haraway, Dona. (1995), *Ciencia, cyborgs y mujeres*. La Reinención de la Naturaleza, Madrid, España, Cátedra.

Jaquette, Jane. (1994), *Los movimientos de mujeres y las transiciones democráticas en América Latina*. En: León, M. (Comp.) *Mujeres y participación política. Avances y desafíos en América Latina*. Santa fé de Bogotá, Tercer Mundo Editores, pp.117-138.

Jelin, Elizabeth, (1994), ¿Ante, de, en, y?: mujeres y derechos humanos. *América LATina hoy: Revista de Ciencias Sociales*, 9, 6-23.

Jelin, Elizabeth. (1997), Igualdad y diferencia: dilemas de la ciudadanía de las mujeres en América Latina. *Agora. Cuadernos de estudios políticos*, 3, 189-214.

Levín, Silvia. (2010), *Derechos al revés: ¿salud sexual y reproductiva sin libertad?*, Buenos Aires, Argentina, Espacio editorial.

Maffia, Diana. (2004), *Contra las dicotomías: feminismos y epistemología crítica*. Instituto Interdisciplinario de Género, UBA.

Pateman, Carole. (1995), *El contrato sexual*, Barcelona, España, Anthropos.

Rosenberg, Martha y Schvartzman, Elsa, (2014), La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La lucha por el Derecho al Aborto: una Deuda de la Democracia. *Revista Voces en el Fénix*, 32, 142-149.

Rozas Pagaza, Margarita, (2015), El Trabajo Social: el Debate de lo Público en las Relaciones entre Estado y Sociedad. *Revista Debate Público. Reflexión de Trabajo Social*, 10, 61-66.

Somogyi, Mariana Valenzuela. (2016), Las bases epistémicas de la concepción feminista de la ciudadanía. *Revista Estudios Feministas*, 24(1), 31-43. <https://dx.doi.org/10.1590/1805-9584-2016v24n1p31>

Zicavo, Eugenia.; Astorino Julieta y Saporosi, Lucas, (2015), La interrupción voluntaria del embarazo en Argentina: discursos sociales circulantes en los proyectos de ley vigentes. *Revista Anfora*, vol. 22, N° 38.